

Diario Oficial de la Unión Europea



Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

55º año

1 de febrero de 2012

Número de información

Sumario

Página

IV *Información*

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS

2012/C 28/01	Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) (1)	1
2012/C 28/02	Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) (1)	3
2012/C 28/03	Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) (1)	9
2012/C 28/04	Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) (1)	14

ES

Precio:
4 EUR

(1) Texto pertinente a efectos del EEE

(continúa al dorso)

V Anuncios

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

2012/C 28/05

Ayuda estatal — República Italiana — Ayuda estatal SA.32014 (11/C) (ex 11/NN), SA.32015 (11/C) (ex 11/NN), SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) — Ayuda estatal a las empresas del antiguo grupo Tirrenia (posible ayuda estatal en forma de compensación por servicio público y posible ayuda en el contexto de la privatización) (SA.28172 (CP 103/2009), SA.29989 (CP 393/2009), SA.30107 (CP 414/2009), SA.30206 (CP 3/2010), SA.31645 (CP 234/2010), SA.31715 (CP 248/2010)) — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ⁽¹⁾ 18

The logo consists of a white square containing the letters 'ES' in a bold, black, sans-serif font.

⁽¹⁾ Texto pertinente a efectos del EEE

IV

(Información)

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/C 28/01)

Número de referencia de ayuda estatal	SA.30544 (X 124/10)
Estado miembro	Italia
Número de referencia del Estado miembro	—
Nombre de la región (NUTS)	CALABRIA Artículo 107.3.a
Autoridad que concede las ayudas	REGIONE CALABRIA — DIPARTIMENTO LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE VIA LUCREZIA DELLA VALLE CATANZARO www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/
Denominación de la medida de ayuda	POR CALABRIA 2007/2013 — ASSE ADATTABILITA' OBIETTIVO SPECIFICO A — avviso pubblico per la presentazione di progetti per la formazione continua dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese e delle grande imprese come rettificato con Decreto ...
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	BURC calabria
Tipo de medida	Régimen
Modificación de una medida de ayuda existente	—
Duración	17.2.2010 - 31.12.2013
Sector(es) económico(s) afectado(s)	INDUSTRIA MANUFACTURERA, HOSTELERÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS, ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Tipo de beneficiario	PYME
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen	EUR 10,00 (en millones)
Para garantías	—
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Subvención directa
Referencia a la decisión de la Comisión	—

En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	por calabria 2007/2013 — asse adattabilità — obiettivo specifico A. — EUR 10,00 (en millones)	
Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en%
Formación específica (Art. 38, apdo. 1)	25 %	10 %
Formación general (Art. 38, apdo. 2)	60 %	20 %

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

<http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro>

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/C 28/02)

Número de referencia de ayuda estatal	SA.33901 (11/X)
Estado miembro	Bulgaria
Número de referencia del Estado miembro	—
Nombre de la región (NUTS)	Bulgaria Artículo 107.3.a
Autoridad que concede las ayudas	Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма www.opcompetitiveness.bg
Denominación de la medida de ayuda	Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия“
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 54/2011 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119 ;Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/156_892007bg161po003annex.pdf ;Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия“
Tipo de medida	Régimen
Modificación de una medida de ayuda existente	—
Duración	9.11.2011 - 8.6.2012
Sector(es) económico(s) afectado(s)	Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda
Tipo de beneficiario	PYME,gran empresa
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen	BGN 58,67 (en millones)
Para garantías	—
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Subvención directa
Referencia a la decisión de la Comisión	—
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 — BGN 49,87 (en millones)

Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en%
Ayudas a las PYME para financiar los costes de derechos de propiedad industrial (Art. 33)	70 %	—
Investigación industrial [Art. 31, apdo. 2, letra b)]	50 %	20 %
Desarrollo experimental [Art. 31, apdo. 2, letra c)]	25 %	20 %

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

http://www.opcompetitivebg/module4.php?menu_id=45&id=89

Número de referencia de ayuda estatal	SA.33916 (11/X)
Estado miembro	Francia
Número de referencia del Estado miembro	—
Nombre de la región (NUTS)	—
Autoridad que concede las ayudas	Caisse des dépôts et consignations 56 rue de Lille 75007 Paris FRANCE www.caisse-des-depots.fr
Denominación de la medida de ayuda	Régime d'aides exempté de notification relatif aux aides en faveur de la protection de l'environnement dans le cadre des Investissements d'avenir
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	<ul style="list-style-type: none"> — Loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au programme d'investissement d'avenir — Convention du 28 septembre 2010 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir («action ville de demain»)
Tipo de medida	Régimen
Modificación de una medida de ayuda existente	—
Duración	1.12.2011 - 31.12.2013
Sector(es) económico(s) afectado(s)	Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda
Tipo de beneficiario	PYME, gran empresa
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen	EUR 50,00 (en millones)
Para garantías	—
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Subvención directa
Referencia a la decisión de la Comisión	—
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	—

Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en%
Ayudas a la inversión en medidas de ahorro energético (Art. 21)	20 %	20 %
Ayudas a la inversión para la protección del medio ambiente destinadas a la cogeneración de alta eficiencia (Art. 22)	45 %	20 %
Ayudas a la inversión para la protección del medio ambiente destinadas a la promoción de energía procedente de fuentes de energías renovables (Art. 23)	45 %	20 %
Ayudas para estudios medioambientales (Art. 24)	50 %	20 %
Ayudas a la inversión para que las empresas puedan superar las normas comunitarias para la protección del medio ambiente o aumentar el nivel de protección del medio ambiente en ausencia de normas comunitarias (Art. 18)	35 %	20 %
Ayuda para la adquisición de nuevos vehículos de transporte que superen las normas comunitarias o que incrementen el nivel de protección del medio ambiente a falta de normas comunitarias (Art. 19)	35 %	20 %

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

<http://www.caissedesdepots.fr/activites/investissements-davenir/ville-de-demain-1000-meur.html>

Número de referencia de ayuda estatal	SA.33921 (11/X)
Estado miembro	Reino Unido
Número de referencia del Estado miembro	—
Nombre de la región (NUTS)	WALES Zonas mixtas
Autoridad que concede las ayudas	Cardiff University European Office / Research and Commercial Division Cardiff University 30-36 Newport Road Cardiff CF24 0DE United Kingdom http://www.cf.ac.uk/archi/state_aid.html
Denominación de la medida de ayuda	Cardiff University Built Environment Sustainability Training
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	Further and Higher Education Act 1992 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1992/Ukpga_19920013_en_1
Tipo de medida	Régimen
Modificación de una medida de ayuda existente	—
Duración	1.11.2011 - 31.8.2015

Sector(es) económico(s) afectado(s)	CONSTRUCCIÓN	
Tipo de beneficiario	PYME,gran empresa	
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen	GBP 1,85 (en millones)	
Para garantías	GBP 0,00 (en millones)	
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Otros — Subsidised training schemes	
Referencia a la decisión de la Comisión	—	
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	European Structural funds — ESF — GBP 3,70 (en millones)	
Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en%
Formación específica (Art. 38, apdo. 1)	25 %	20 %
Formación general (Art. 38, apdo. 2)	60 %	20 %

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

http://www.cf.ac.uk/archi/state_aid.html

Número de referencia de ayuda estatal	SA.33944 (11/X)
Estado miembro	República Checa
Número de referencia del Estado miembro	43640/11/08100/08000
Nombre de la región (NUTS)	Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezský kraj Artículo 107.3.a
Autoridad que concede las ayudas	Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 www.mpo.cz
Denominación de la medida de ayuda	Rozvoj — 3. výzva — 1. prodloužení
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání; Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů; Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Tipo de medida	Régimen
Modificación de una medida de ayuda existente	Prolongation SA.33109
Duración	15.11.2011 - 31.12.2012
Sector(es) económico(s) afectado(s)	Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda
Tipo de beneficiario	PYME

Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen	CZK 1 159,33 (en millones)	
Para garantías	—	
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Subvención directa	
Referencia a la decisión de la Comisión	—	
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	SF-ERDF 85 % státní rozpočet 15 % — CZK 2 956,30 (en millones)	
Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en%
Régimen	40 %	20 %

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

<http://mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva4>

Número de referencia de ayuda estatal	SA.33967 (11/X)
Estado miembro	Suecia
Número de referencia del Estado miembro	N2011/6812/MK
Nombre de la región (NUTS)	SVERIGE Zonas mixtas
Autoridad que concede las ayudas	Skatteverket 171 94 Solna www.skatteverket.se
Denominación de la medida de ayuda	Bättre skattemässiga förutsättningar för landansluten el till fartyg som ligger i hamn, s.k. landström.
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	SFS 2010:1088
Tipo de medida	Régimen
Modificación de una medida de ayuda existente	—
Duración	1.11.2011 - 25.6.2014
Sector(es) económico(s) afectado(s)	Transporte marítimo y por vías navegables interiores
Tipo de beneficiario	PYME,gran empresa
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen	SEK 1,50 (en millones)
Para garantías	—
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Otras formas de ventajas fiscales

Referencia a la decisión de la Comisión	—	
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	—	
Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en%
Ayudas medioambientales en forma de reducciones fiscales (Art. 25)	1 500 000 SEK	—

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

<http://62.95.69.3/SFSdoc/10/101088.PDF>

SFS

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GX03144

Proposition

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/C 28/03)

Número de referencia de ayuda estatal	SA.34024 (11/X)	
Estado miembro	Austria	
Número de referencia del Estado miembro	—	
Nombre de la región (NUTS)	PINZGAU-PONGAU Regiones no asistidas	
Autoridad que concede las ayudas	Land Salzburg Südtiroler Platz 11 Postfach 527 A — 5010 Salzburg www.salzburg.gv.at	
Denominación de la medida de ayuda	Seilbahninvestitionen im Familienskigebiet Loferer Alm	
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	Grundsatzbeschluss der Salzburger Landesregierung vom 22.6.2009 zum Investitions- und Wachstumsprogramm 2009 — 2014	
Tipo de medida	ayuda ad hoc	
Modificación de una medida de ayuda existente	—	
Fecha de la concesión	18.11.2011	
Sector(es) económico(s) afectado(s)	Otro transporte terrestre de pasajeros	
Tipo de beneficiario	PYME — Firma Bergbahn Lofer GmbH	
Importe global de la ayuda ad hoc concedida a la empresa	EUR 1,10 (en millones)	
Para garantías	—	
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Subvención directa	
Referencia a la decisión de la Comisión	—	
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	—	
Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en %
Ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME (Art. 15)	12,22 %	—

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

<http://www.salzburg.gv.at/wirtschaftsfoerderung2007>

Ad-hoc-Beihilfen

Número de referencia de ayuda estatal	SA.34025 (11/X)
Estado miembro	Austria

Número de referencia del Estado miembro	—	
Nombre de la región (NUTS)	PINZGAU-PONGAU Regiones no asistidas	
Autoridad que concede las ayudas	Land Salzburg Südtiroler Platz 11 Postfach 527 A — 5010 Salzburg www.salzburg.gv.at	
Denominación de la medida de ayuda	Seilbahninvestitionen im Skigebiet Hochkönig Dienten-Mühlbach	
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	Grundsatzbeschluss der Salzburger Landesregierung vom 22.6.2009 zum Investitions- und Wachstumsprogramm 2009 — 2014	
Tipo de medida	ayuda ad hoc	
Modificación de una medida de ayuda existente	—	
Fecha de la concesión	18.11.2011	
Sector(es) económico(s) afectado(s)	Otro transporte terrestre de pasajeros	
Tipo de beneficiario	PYME — Firma Hochkönig Bergbahnen GmbH	
Importe global de la ayuda ad hoc concedida a la empresa	EUR 1,30 (en millones)	
Para garantías	—	
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Subvención directa	
Referencia a la decisión de la Comisión	—	
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	—	
Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en %
Ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME (Art. 15)	10 %	—

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

<http://www.salzburg.gv.at/wirtschaftsfoerderung2007>

Ad-hoc-Beihilfen

Número de referencia de ayuda estatal	SA.34029 (11/X)	
Estado miembro	Chipre	
Número de referencia del Estado miembro	25.06.001.824	
Nombre de la región (NUTS)	Cyprus Regiones no asistidas	
Autoridad que concede las ayudas	Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος www.hrdauth.org.cy	
Denominación de la medida de ayuda	Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξαπομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις	

Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	(i) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ. (ii) Ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμος (Νόμος 125(I) του 1999, άρθρο 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο Αρ. 21 (I) του 2007. (iii) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008. (iv) Απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αρ. 334 και ημερομηνία 30.11.2011	
Tipo de medida	Régimen	
Modificación de una medida de ayuda existente	Prolongation SA.32292	
Duración	1.12.2011-30.6.2012	
Sector(es) económico(s) afectado(s)	Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda	
Tipo de beneficiario	PYME,gran empresa	
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen	EUR 2,75 (en millones)	
Para garantías	—	
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Subvención directa	
Referencia a la decisión de la Comisión	—	
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	—	
Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en %
Formación general (Art. 38, apdo. 2)	60 %	20 %

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

<http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/EktaktoSxedioKatartisisAnergwn/EktaktoSxedioKatartisis.htm>

Número de referencia de ayuda estatal	SA.34037 (11/X)	
Estado miembro	Irlanda	
Número de referencia del Estado miembro	—	
Nombre de la región (NUTS)	BORDER, MIDLAND AND WESTERN, SOUTHERN AND EASTERN Zonas mixtas	
Autoridad que concede las ayudas	The Sustainable Energy Authority of Ireland Wilton Park House Wilton Place Dublin 2 www.seai.ie	
Denominación de la medida de ayuda	Ocean Energy Prototype Development Fund	
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	Sustainable Energy Ireland Act 2002 http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/act/pub/0002/index.html	
Tipo de medida	Régimen	
Modificación de una medida de ayuda existente	Prolongation X 785/2009	

Duración	1.1.2012-31.12.2014	
Sector(es) económico(s) afectado(s)	Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas	
Tipo de beneficiario	PYME,gran empresa	
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen	EUR 3,33 (en millones)	
Para garantías	—	
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Subvención directa	
Referencia a la decisión de la Comisión	—	
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	—	
Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en %
Investigación industrial [Art. 31, apdo. 2, letra b)]	50 %	20 %
Desarrollo experimental [Art. 31, apdo. 2, letra c)]	25 %	20 %

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

http://www.sei.ie/Renewables/Ocean_Energy/Prototype_Development_Fund/Application_Guide

From the SEI homepage, click on renewables, then ocean energy, then prototype development fund, then application guide

Número de referencia de ayuda estatal	SA.34039 (11/X)	
Estado miembro	Grecia	
Número de referencia del Estado miembro	GR	
Nombre de la región (NUTS)	ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI, KENTRIKI MAKEDONIA, THES-SALIA, IPEIROS, IONIA NISIA, DYTIKI ELLADA, STEREA ELLADA, PELOPONNISOS, ATTIKI, VOREIO AIGAIO, KRITI Artículo 107.3.a,Artículo 107.3.c	
Autoridad que concede las ayudas	GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY 14-18 MESOGEION AV 115 10 GREECE http://www.gsrt.gr	
Denominación de la medida de ayuda	Bilateral RTD Cooperation Greece — USA in the Materials Sector 2011 — 2013	
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	Law 1514/1985 Law 2919/2001 PD 274/2000 Law 3777/2009 Ministerial Decision 8653/1766/0020 (FEK (Official Journal of Greek Government) B/ 2001/24-12-2010 Law 3653/2008	
Tipo de medida	Régimen	
Modificación de una medida de ayuda existente	—	

Duración	15.11.2011-31.12.2015	
Sector(es) económico(s) afectado(s)	Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda	
Tipo de beneficiario	PYME,gran empresa	
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen	EUR 0,08 (en millones)	
Para garantías	—	
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Subvención directa	
Referencia a la decisión de la Comisión	—	
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	ERDF — EUR 0,25 (en millones)	
Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en %
Desarrollo experimental [Art. 31, apdo. 2, letra c)]	100 %	0 %
Investigación fundamental [Art. 31, apdo. 2, letra a)]	100 %	—
Investigación industrial [Art. 31, apdo. 2, letra b)]	100 %	0 %

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&oID=777&neID=673&neTa=1_215_1&nclID=0&neHC=0&tbid=0&lrid=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1

Δράσεις Ενίσχυσης Ε&Τ , Τρέχουσες Εθνικές Δράσεις , Ενεργές προκηρύξεις ΕΣΠΑ

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/C 28/04)

Número de referencia de ayuda estatal	SA.33946 (11/X)	
Estado miembro	Polonia	
Número de referencia del Estado miembro	PL	
Nombre de la región (NUTS)	Poludniowoslaski (SRE 2001) Artículo 107.3.a	
Autoridad que concede las ayudas	Minister Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa www.mg.gov.pl	
Denominación de la medida de ayuda	Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o .o. – dotacja celowa na utworzenie nowych miejsc pracy oraz na inwestycje	
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	Uchwały Rady Ministrów nr 246/2009 z 22 grudnia 2009 r. zmieniona uchwałą 142/2010 „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o .o.w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010 – 2013”.	
Tipo de medida	ayuda ad hoc	
Modificación de una medida de ayuda existente	—	
Fecha de la concesión	26.10.2011	
Sector(es) económico(s) afectado(s)	Fabricación de vehículos de motor	
Tipo de beneficiario	gran empresa — Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o .o.	
Importe global de la ayuda ad hoc concedida a la empresa	PLZ 14,70 (en millones)	
Para garantías	—	
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Subvención directa	
Referencia a la decisión de la Comisión	—	
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	—	
Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en%
Ayudas ad hoc (Art. 13.1)	2,1 %	0 %

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

<http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/fiat%20zmiana.pdf>

<http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/fiat.pdf>

Número de referencia de ayuda estatal	SA.33950 (11/X)	
Estado miembro	Reino Unido	
Número de referencia del Estado miembro	—	
Nombre de la región (NUTS)	—	
Autoridad que concede las ayudas	The Carbon Trust 6th Floor 5 New Street Square London, EC4A 3BF www.carbontrust.co.uk	
Denominación de la medida de ayuda	The Carbon Trust Offshore Wind Accelerator — Stage Two	
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	Section 5 of the Science and Technology Act 1965 Section 153(1) of the Environmental Protection Act 1990 (as amended by S.I. 2002/1686)	
Tipo de medida	Régimen	
Modificación de una medida de ayuda existente	—	
Duración	1.7.2010-31.12.2013	
Sector(es) económico(s) afectado(s)	Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda	
Tipo de beneficiario	PYME,gran empresa	
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen	GBP 5,00 (en millones)	
Para garantías	GBP 0,00 (en millones)	
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Subvención directa	
Referencia a la decisión de la Comisión	—	
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	—	
Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en%
Investigación industrial [Art. 31, apdo. 2, letra b)]	65 %	20 %
Desarrollo experimental [Art. 31, apdo. 2, letra c)]	40 %	20 %

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

[http://www.carbontrust.co.uk/emerging-technologies/current-focus-areas/offshore-wind/Documents/OWA%20Stage%20Two%20Aid%20Scheme%20\(Full%20Text\).pdf](http://www.carbontrust.co.uk/emerging-technologies/current-focus-areas/offshore-wind/Documents/OWA%20Stage%20Two%20Aid%20Scheme%20(Full%20Text).pdf)

Home — Emerging Technologies — Our Current Work on Emerging Technologies — Offshore Wind Accelerator — (Progress so far) View further information on the Aid Scheme under which the Carbon Trust provides Grant funding under Stage 2

Número de referencia de ayuda estatal	SA.33955 (11/X)	
Estado miembro	Alemania	
Número de referencia del Estado miembro	—	
Nombre de la región (NUTS)	BAYERN Zonas mixtas	
Autoridad que concede las ayudas	Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) Bürgermeister-Ulrich-Straße 160 86179 Augsburg www.lfu.bayern.de	
Denominación de la medida de ayuda	Richtlinien zur Förderung von Umweltberatungen und Umweltmanagementsystemen bei kleinen und mittleren Unternehmen (Bayerisches Umweltberatungs- und Auditprogramm)	
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit vom 12. Mai 2006 (Az.: 1A3d-U8033.3-2006/1-1; AllMBI S. 168, geändert durch Bekanntmachung vom 30. November 2009 (Az.:K5a-U8033.3-2009/2-11; AllMBI S. 498), geändert durch Bekanntmachung vom 10. Juni 2011 (Az.: 15g-U8033.3-2009/2-32).	
Tipo de medida	Régimen	
Modificación de una medida de ayuda existente	Modification X 37/2010	
Duración	1.1.2010-30.6.2014	
Sector(es) económico(s) afectado(s)	Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda	
Tipo de beneficiario	PYME	
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen	EUR 0,30 (en millones)	
Para garantías	—	
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Subvención directa	
Referencia a la decisión de la Comisión	—	
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	C(2007) 3187 — EUR 1,00 (en millones)	
Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en%
Ayudas a las PYME para servicios de consultoría (Art. 26)	50 %	—

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

http://www.izu.bayern.de/foerder/programme/detail_programm.htm?id=11

Número de referencia de ayuda estatal	SA.33956 (11/X)	
Estado miembro	Dinamarca	

Número de referencia del Estado miembro	2011-240-0026	
Nombre de la región (NUTS)	—	
Autoridad que concede las ayudas	Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK-1402 København K www.skat.dk	
Denominación de la medida de ayuda	Elpatronordningen	
Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente)	Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.)	
Tipo de medida	Régimen	
Modificación de una medida de ayuda existente	Modification N 391/2006	
Duración	1.11.2011-31.10.2021	
Sector(es) económico(s) afectado(s)	Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda	
Tipo de beneficiario	PYME,gran empresa	
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen	DKK 50,00 (en millones)	
Para garantías	—	
Instrumento de ayuda (artículo 5)	Otras formas de ventajas fiscales	
Referencia a la decisión de la Comisión	—	
En caso de cofinanciación con fondos comunitarios	—	
Objetivos	Intensidad máxima de ayuda en % o importe máximo de ayuda en moneda nacional	Primas PYME en%
Ayudas medioambientales en forma de reducciones fiscales (Art. 25)	50 000 000 DKK	—

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda:

Bekendtgørelse nr. 998 af 25. oktober 2011:

<https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=998&s20=2011>

Lov nr. 722 af 25. juni 2010:

<https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=722&s20=2010>

Lov nr. 1564 af 21. december 2010:

<https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=1564&s20=2010>

Lov nr. 625 af 14. juni 2011:

<https://www.lovtidende.dk/Forms/L0700.aspx?s31=10&s19=625&s20=2011>

V

(Anuncios)

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

COMISIÓN EUROPEA

AYUDA ESTATAL — REPÚBLICA ITALIANA

Ayuda estatal SA.32014 (11/C) (ex 11/NN), SA.32015 (11/C) (ex 11/NN), SA.32016 (11/C) (ex 11/NN)

Ayuda estatal a las empresas del antiguo grupo Tirrenia (posible ayuda estatal en forma de compensación por servicio público y posible ayuda en el contexto de la privatización)
(SA.28172 (CP 103/2009), SA.29989 (CP 393/2009), SA.30107 (CP 414/2009), SA.30206 (CP 3/2010), SA.31645 (CP 234/2010), SA.31715 (CP 248/2010))

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/C 28/05)

Por carta de 5 de octubre de 2011, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a la República Italiana su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con la medida antes citada.

Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Ayudas Estatales
Despacho: J-70 3/225
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22961242

Dichas observaciones se comunicarán a Italia. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.

PROCEDIMIENTO

El 29 de julio de 2010, las autoridades italianas notificaron a la Comisión, de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE, la compensación pública abonada en 2008, 2009 y 2010 por el Estado italiano a Caremar - Campania Regionale Marittima, S.p.A. (en lo sucesivo, «Caremar»), una de las empresas regionales del antiguo grupo Tirrenia. La notificación se registró con el número de asunto N 338/2010. Aunque esta medida ha

sido notificada a la Comisión, dado que la ayuda estatal se había ejecutado antes de que la Comisión pudiera pronunciarse sobre su compatibilidad con el mercado interior, la medida se registró como ayuda no notificada con el número de asunto NN 51/2010.

El 24 de septiembre de 2010, la Comisión solicitó información adicional sobre la medida notificada. En la misma carta, la Comisión informó a las autoridades italianas de que debería

presentarse una notificación completa que abarcase la compensación abonada a cada una de las empresas del antiguo grupo Tirrenia a partir del 1 de enero de 2009.

El 20 de octubre de 2010, las autoridades italianas facilitaron la información solicitada, pero no notificaron formalmente la compensación pagada por el Estado italiano a las restantes empresas del antiguo Grupo Tirrenia, a saber, Tirrenia di Navigazione S.p.A. (en lo sucesivo, «Tirrenia»), Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A. (en lo sucesivo, «Saremar»), Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A. (en lo sucesivo, «Toremar») y Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A. (en lo sucesivo, «Siremar»).

El 1 de diciembre de 2010, las autoridades italianas notificaron a la Comisión la compensación abonada en 2009 y 2010 por el Estado Italiano a Saremar y Toremar, dos empresas regionales del antiguo Grupo Tirrenia. Además, las autoridades italianas volvieron a presentar la notificación de la compensación pública abonada a Caremar. En la medida en que la compensación abonada en 2008 a las empresas del antiguo grupo Tirrenia entra en el ámbito de aplicación de los convenios iniciales (véase más adelante) y, por tanto, está sujeta a evaluación separada, la nueva notificación sólo abarca la compensación abonada a Caremar en 2009 y 2010.

Mediante carta de 15 de diciembre de 2010, las autoridades italianas informaron a la Comisión de que el mismo nivel de compensación notificado para 2010 a las tres empresas regionales sería aplicable en 2011, y ampliaron las notificaciones anteriores en consecuencia. Además, las autoridades italianas procedieron a la retirada de la primera notificación formal de los importes abonados a Caremar, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93⁽¹⁾ [actualmente artículo 108] del Tratado CE (en lo sucesivo, «Reglamento de procedimiento»).

Dado que la medida se había aplicado antes de la notificación y la aprobación formal por la Comisión, Italia no observó la disposición suspensiva del artículo 108, apartado 3, del TFUE. Por consiguiente, las medidas han sido registradas como ayudas no notificadas con los número de asunto SA 32014, SA 32015 y SA 32016.

El 23 de febrero de 2011, la Comisión solicitó información adicional a las autoridades italianas. Además, la Comisión instó a las autoridades italianas a notificarle formalmente la compensación pública abonada durante 2009–2011 para las restantes empresas del antiguo grupo Tirrenia, a saber, Tirrenia y Siremar.

Las autoridades italianas facilitaron la información solicitada el 6 de abril de 2011. Aunque la respuesta de las autoridades italianas incluía cierta información, en su mayoría sobre las rutas cubiertas prestadas por Tirrenia y Siremar y los servicios prestados por los competidores en las rutas en cuestión, no se presentó ninguna notificación formal en el sentido del artículo 108, apartado 3, del TFUE, sobre la compensación pública abonada a dichas empresas.

El 23 de marzo de 2009, el 9 de diciembre de 2009, el 21 de diciembre de 2009, el 6 de enero de 2010, el 27 de septiembre de 2010 y el 12 de octubre de 2010, la Comisión recibió seis

⁽¹⁾ DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

denuncias relativas a distintas medidas de apoyo adoptadas por el Estado italiano en favor de las empresas del antiguo Grupo Tirrenia, en particular la compensación por servicio público concedida a las empresas después de la expiración de los primeros convenios (véase más abajo), las medidas de apoyo supplementarias establecidas por varios actos legislativos adoptados en el contexto de la privatización de las empresas, así como determinados aspectos relativos al propio procedimiento de privatización. La Comisión tuvo en cuenta la información presentada por los denunciantes a efectos de la presente Decisión.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS

El Grupo Tirrenia era propiedad del Estado italiano a través de la empresa Fintecna - Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. (en lo sucesivo, «Fintecna») e inicialmente incluía seis empresas, a saber, Tirrenia, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar y Toremar, que prestaban servicios de transporte marítimo con arreglo a diferentes contratos de servicio público celebrados con el Estado italiano en 1991, y con vigencia de 20 años, de enero de 1989 a diciembre de 2008 (en lo sucesivo, «los Convenios iniciales»)⁽²⁾.

El objetivo de estos contratos de servicio público era garantizar la regularidad sin interrupciones y la fiabilidad de los servicios de transporte marítimo, la mayoría de los cuales conectan el territorio continental de Italia con Sicilia, Cerdeña y otras islas italianas más pequeñas. A tal efecto, el Estado italiano concedió una ayuda financiera en forma de subvenciones pagadas directamente a cada una de las sociedades del Grupo.

El Decreto Ley nº 207, de 30 de diciembre de 2008, convertido en Ley nº 14, de 27 de febrero de 2009, establece la prórroga del Convenio inicial hasta el final de 2009. El artículo 19 ter del Decreto Ley nº 135, de 25 de septiembre de 2009, convertido en Ley nº 166, de 20 de noviembre de 2009 (en lo sucesivo, «la Ley de 2009») prorrogó de nuevo los convenios iniciales hasta el 30 de septiembre de 2010, cuando Italia tenía previsto finalizar el proceso de privatización de las empresas del Grupo Tirrenia. La Ley nº 163, de 1 de octubre de 2010, por la que se convertía el Decreto Ley nº 125, de 5 de agosto de 2010 (en lo sucesivo, «la Ley de 2010»), preveía una nueva prórroga de los primeros convenios hasta que finalizase el proceso de privatización.

Las autoridades italianas notificaron formalmente tan sólo la compensación abonada a Caremar, Saremar y Toremar durante 2009–2011.

Sin embargo, la Comisión considera que de la Ley nº 166, de 20 de noviembre de 2009, y del Decreto Ley 125/2010, convertidos, con algunas modificaciones, en Ley nº 163, de 1 de octubre de 2010, se derivan elementos de ayuda estatal adicionales.

Además, sobre la base de la información a su disposición, la Comisión considera que la privatización de Tirrenia y Siremar, realizada en el marco de un procedimiento de insolvencia específico (procedimiento administrativo extraordinario) mediante

⁽²⁾ Después de la adopción de la Decisión de 2004, Tirrenia di Navigazione se fusionó con Adriatica.

la venta de empresas en actividad con derecho a prestar un servicio público (así como, en el caso de Tirrenia, servicios prestados en distintas rutas gestionadas fuera del régimen de concesión), de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 4, apartado 4 *quarter*, del Decreto Ley nº 347 de 23 de diciembre de 2003, por el que se establecen medidas urgentes para la reestructuración de grandes empresas insolventes, convertido, con algunas modificaciones, en Ley nº 39 de 18 de febrero de 2004 (en lo sucesivo, «la Ley Marzano»), modificada posteriormente, podría implicar elementos de ayuda.

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS

Existencia de ayuda

Compensación por servicio público

Sobre la base de la información disponible en el momento actual, la Comisión adopta el punto de vista preliminar de que las cuatro condiciones establecidas por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Altmark con objeto de determinar si la compensación por servicio público constituye una ventaja en el sentido del artículo 107 del TFUE no se cumplen acumulativamente en el presente caso y, por lo tanto, considera que la medida confiere una ventaja económica a los beneficiarios.

En primer lugar, hasta el presente, las autoridades italianas no han presentado a la Comisión acto jurídico alguno por el que se establezca una descripción clara de las obligaciones de servicio público impuestas a los beneficiarios. En ausencia de una definición previa precisa del nivel de los servicios requeridos, la Comisión no puede evaluar si la definición de la misión de servicio público constituye un error manifiesto por referencia a servicios competidores.

En segundo lugar, la Comisión señala que los parámetros de base para el cálculo de la compensación se establecieron previamente y que respetan los requisitos de transparencia. Más concretamente, los convenios iniciales contenían una lista exhaustiva y exacta de los elementos de los costes que deben tenerse en cuenta, así como la metodología del cálculo del rendimiento para el operador. Por lo que se refiere a la compensación por la ejecución de las obligaciones de servicio público en 2010 y en adelante, la Comisión observa que su nivel se fijó sobre la base de la Directiva del Comité Interministerial de Planificación Económica (*Comitato interministeriale per la programmazione economica*, CIPE), publicada ya en 2008. El método de cálculo de la compensación, es decir, el coste de los elementos que se tuvieron en cuenta y el rendimiento de los capitales invertidos, se detallan en ella.

Sin embargo, la Comisión observa que, por lo que se refiere a la ejecución de las obligaciones de servicio público a partir de 2010, la prima de riesgo se ha fijado en el 6,5 %. En esta fase, la Comisión tiene dudas sobre si ello refleja un nivel apropiado de riesgo teniendo en cuenta que, a primera vista, los operadores no asumen los riesgos soportados normalmente en la gestión de dichos servicios. Por lo tanto, la Comisión tiene dudas sobre la proporcionalidad de la compensación por la explotación de los servicios y adopta el punto de vista preliminar de que los operadores han sido compensados en exceso por la realización de las tareas de servicio público a partir de 2010.

Por último, la Comisión observa que los beneficiarios no han sido elegidos mediante un procedimiento de licitación. Los distintos actos jurídicos han prorrogado simplemente el sistema ya en vigor, autorizando a los operadores ya existentes a seguir recibiendo compensación por la ejecución de las obligaciones de servicio público. Las autoridades italianas no han facilitado a la Comisión indicación alguna de que el nivel de la compensación se haya determinado sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada con medios de transporte para poder cumplir las necesidades de servicio público requeridas, habría tenido que sufragar para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable para el cumplimiento de tales obligaciones. A menos que se pruebe lo contrario, en este asunto no puede constatarse que la compensación abonada a las empresas por la prestación de un SIEG se hayan determinado sobre la base de los costes de una empresa eficiente.

La Comisión considera que la indemnización abonada durante 2009-2011 a Caremar, Saremar y Toremar utiliza recursos del Estado que confieren una ventaja económica a los beneficiarios que puede afectar al comercio de la UE y falsear la competencia en el mercado interior y, por lo tanto, es probable que constituya ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

Además, en la medida en que los primeros convenios celebrados por el Estado italiano con Siremar y Tirrenia y las restantes empresas del antiguo Grupo Tirrenia también se han prorrogado mediante los mismos actos jurídicos, la Comisión considera que la compensación pública pagada a estas empresas en el mismo periodo constituye una ayuda en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

Venta de activos

La Comisión considera que el control ejercido por las autoridades públicas durante el proceso de venta de activos, según lo establecido por la Ley Marzano, posteriormente modificada por el Decreto Ley nº 134/2008, es tal que supone la imputabilidad al Estado de las decisiones adoptadas por el Comisario Extraordinario.

Cuando el Estado vende sus propios activos por debajo del precio de mercado está renunciando a determinados recursos públicos y, al mismo tiempo, concede una ventaja que el comprador de los activos o a la empresa privatizada no habría obtenido en condiciones normales de mercado. Esta ventaja es necesariamente selectiva, puesto que solamente se concederá al comprador de los activos, o bien a la actividad económica en cuestión.

Aunque la convocatoria de manifestación de interés para los activos de Tirrenia y Siremar se publicó en varios periódicos, no detalla los activos objeto de venta y no daba instrucciones claras a los licitadores en cuanto a las fases posteriores del procedimiento. La convocatoria no contiene criterios de selección o preselección o cualquier otra condición que deba ser cumplida por los licitadores, aparte de la condición obligatoria de seguir prestando un servicio público en las condiciones impuestas por los actos por los que se encomienda la misión.

Además, las normas especiales aplicables a los servicios públicos esenciales introducidos mediante el Decreto Ley nº 134/2008, y aplicables en el presente caso, reducían considerablemente los requisitos de transparencia establecidos por el régimen general, en particular al permitir negociaciones privadas entre el Comisario Extraordinario y los compradores potenciales.

Por otra parte, la Comisión toma nota de que, de conformidad con las disposiciones del Decreto Ley 134/2008, los criterios de adjudicación no son necesariamente tales como para obtener el precio más alto para los activos objeto de la venta. El procedimiento ya no está destinado a maximizar los ingresos procedentes de la venta de activos.

Por lo demás, la Comisión observa que, en este caso concreto, se impusieron determinadas condiciones a los compradores potenciales en lo que se refiere a la mano de obra.

Al mismo tiempo, la Comisión toma nota de que la convocatoria de manifestaciones de interés citaba explícitamente como condición obligatoria la continuidad del servicio público durante la vigencia de los nuevos convenios.

La Comisión considera, a priori, que los posibles inversores que pudieran haber considerado un uso diferente de los activos en cuestión podrían haber sido disuadidos de presentar una oferta en las primeras fases del procedimiento. Es cuestionable que imponiendo la obligación de prestar servicio público el Estado haya procurado obtener el precio más elevado, sino que más bien perseguía un objetivo público basado en consideraciones de desarrollo social y regional. La Comisión tiene dudas de que un vendedor privado hubiera dado la misma importancia al funcionamiento ininterrumpido del servicio público. En esta fase, la Comisión no puede excluir que un vendedor privado hubiera intentado vender los activos por separado y no habría tenido interés a la hora de definir las líneas estratégicas de la futura actividad desarrollada con estos activos.

Por lo tanto, la Comisión adopta el punto de vista preliminar de que esta condición obstaculiza el marco competitivo del proceso de venta ya que, en sí mismo, podría impedir que un licitador, incluso ofreciendo el precio más elevado, fuese elegido a menos que se comprometiese a una estrategia comercial que se ajustase plenamente a los objetivos públicos fijados.

La Comisión considera que, en principio, la obligación de mantener los niveles de empleo no habría sido impuesta por un vendedor privado en condiciones normales de mercado, pues éste correría el riesgo de no recibir el precio más alto por los activos en venta.

Por lo tanto, la Comisión considera, en el momento actual, que el proceso de privatización de Tirrenia no fue suficientemente transparente e incondicional para garantizar por sí mismo que la venta tenga se realizó a precio de mercado. Sobre la base de la información disponible, no puede excluirse que las ofertas podrían haber sido más altas o que otros licitadores habrían participado en el contrato en el caso de que los criterios de selección hubieran sido más transparentes y la licitación hubiera sido incondicional. Al abrir el procedimiento formal de investigación, la Comisión invita a las autoridades italianas y a las

partes interesadas que faciliten toda la información pertinente para evaluar la conformidad de los precios de venta con el valor de mercado de los activos transferidos al comprador. Lo esencial es una evaluación caso por caso para saber si tales condiciones redujeron el valor de mercado de los activos vendidos y, por consiguiente, otorgaron una ventaja económica a la actividad económica vendida o al comprador.

Prioridad de atraque

Por lo que se refiere a la prioridad de atraque, establecida por el párrafo 21 del artículo 19 ter de la Ley de 2009, la Comisión considera que, en la medida en que la prioridad de atraque no es remunerada, la medida constituye una ventaja que no implica ninguna transferencia de recursos estatales y, por lo tanto, no puede considerarse ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE. No obstante, en la medida en que la prioridad de atraque tenga como resultado una pérdida de recursos del Estado, la medida constituye una ayuda.

Otras medidas de apoyo

Además, la Comisión considera que otros elementos de ayuda estatal adicionales se derivan de la Ley nº 166, de 20 de noviembre de 2009, y del Decreto Ley nº 125/2010, convertidos, con algunas modificaciones, en Ley nº 163, de 1 de octubre de 2010, y más concretamente:

- el uso de los 49 millones EUR y 7 millones EUR que se habían destinado a la modernización de la flota para financiar gastos corrientes (artículo 1, apartado 1, del Decreto Ley nº 125/2010),
- exención fiscal para el conjunto de las operaciones relativas al proceso de privatización (artículo 1, apartado 5 bis, letra g), de la Ley nº 163/2010), y
- la posibilidad de que las empresas del Grupo Tirrenia utilicen los recursos de FAS a fin de responder a las actuales necesidades de liquidez (artículo 1, punto 5 ter, de la Ley nº 163/2010).

En el momento actual, la Comisión considera que todas las medidas antes citadas implican una financiación estatal adicional concedida a las empresas del antiguo Grupo Tirrenia por el Estado italiano y, por lo tanto, implica indiscutiblemente una transferencia de recursos estatales. Las medidas confieren una ventaja económica selectiva a los beneficiarios y puede, por lo tanto, afectar al comercio en la UE y falsear la competencia dentro del mercado interior.

Compatibilidad de la ayuda

En la fase actual del procedimiento, la Comisión considera que las medidas en favor de las empresas del antiguo Grupo Tirrenia son incompatibles con el mercado interior.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, toda ayuda concedida ilegalmente podrá ser recuperada de sus beneficiarios.

TEXTO DE LA CARTA

«La Comisión desea informar a Italia que, después de haber examinado las informaciones transmitidas por las autoridades italianas relativas a la medida en cuestión, ha decidido iniciar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

1. PROCEDIMIENTO

- (1) Mediante notificación electrónica del 29 de julio de 2010, las autoridades italianas informaban a la Comisión, de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE, de las compensaciones públicas que el Estado italiano había respondido en 2008, en 2009 y 2011 a Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.A. (en lo sucesivo "Caremar"), una de las sociedades regionales del ex Grupo Tirrenia⁽³⁾. La notificación fue protocolizada con el número N 338/2010. Puesto que el auxilio de Estado se había puesto en marcha antes de que la Comisión pudiera tomar una posición en mérito a su compatibilidad con el mercado interno, la medida fue registrada como auxilio no notificado con el número NN 51/2010.
- (2) El 24 de setiembre de 2010 la Comisión solicitaba más información sobre la medida notificada. Con la misma carta, la Comisión informaba a las autoridades italianas de la necesidad de presentar una notificación completa que incluyese las compensaciones correspondientes a cada una de las sociedades del ex Grupo Tirrenia a partir del 1º de enero de 2009.
- (3) El 20 de octubre de 2010, las autoridades italianas enviaron información solicitada, sin embargo no notificaron oficialmente la compensación que el Estado italiano había respondido a las otras sociedades del ex Grupo Tirrenia, es decir, a Tirrenia di Navigazione S.p.A. (en lo sucesivo, "Tirrenia"), Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A. (en lo sucesivo, "Saremar"), Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A. (en lo sucesivo, "Toremar") y Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.A. (en lo sucesivo, "Siremar").
- (4) El 1º de diciembre de 2010, las autoridades italianas notificaron a la Comisión las ayudas concedidas por el Estado italiano en 2009 y 2010 a Saremar y Toremar, dos de las sociedades regionales del ex Grupo Tirrenia. Además, las autoridades italianas presentaron la notificación de las compensaciones públicas correspondientes a Caremar. Las compensaciones pagadas a las sociedades del ex Grupo Tirrenia hasta 2008 quedan dentro del campo de aplicación de la decisión de 2004 (cfr. puntos (11) a (18)) y están sujetas a una evaluación separada. La nueva notificación solo abarcaba las compensaciones correspondientes a Caremar para 2009 y 2010.
- (5) Con la carta del 15 de diciembre de 2010 las autoridades italianas informaron a la Comisión que el mismo nivel de compensaciones para las tres sociedades regionales – Caremar, Saremar y Toremar – notificado para el 2010 valía también para

el 2011 y se prorrogaba como consecuencia de las notificaciones precedentes. Además, las autoridades italianas revocaban la primera notificación formal de las compensaciones correspondientes a Caremar, de acuerdo con el artículo 8, apartado 1, del reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, del 22 de marzo de 1999, que establece las modalidades de aplicación del artículo 93 [o artículo 108] del tratado CE⁽⁴⁾ (en lo sucesivo "el reglamento de aplicación").

- (6) Debido a la medida se había puesto en marcha antes de la notificación a la Comisión y antes de la aprobación oficial de esta, se deduce que Italia no cumplió con el deber de suspender la ejecución de las medidas proyectadas, tal como establece el artículo 108, apartado 3, del TFUE. Por tanto, las medidas fueron registradas como ayudas no notificadas, con los números SA 32014, SA 32015 y SA 32016.
- (7) El 23 de febrero de 2011 la Comisión pedía a las autoridades italianas la entrega de más información. La Comisión solicitaba además a las autoridades italianas la notificación oficial a la Comisión de las compensaciones públicas correspondientes a las medidas del 2009 al 2011 para las restantes sociedades del ex Grupo Tirrenia, es decir, para Tirrenia y Siremar.
- (8) El 6 de abril de 2011 las autoridades italianas enviaron la información solicitada. Aunque contenían algunas informaciones, que en su mayor parte se referían a las rutas servidas por Tirrenia y Siremar y a los servicios prestados por los concurrentes en las rutas en cuestión, la respuesta de las autoridades italianas no incluía ninguna notificación oficial, en el sentido del artículo 108, apartado 3, del TFUE, de la compensación pública otorgada a tales sociedades.
- (9) En este contexto, la Comisión recuerda que el hecho de que los servicios de la Comisión pudieran haber tenido conocimiento de una determinada medida no significa que dicha medida haya sido formalmente notificada en el sentido de las normas sobre las ayudas de Estado. Las informaciones que las autoridades italianas enviaron relativamente al servicio público ofrecido por Tirrenia y Siremar no pueden considerarse como notificación oficial en el sentido del artículo 108, apartado 3, del TFUE. Por tanto, en la medida en que las compensaciones pagadas a tales sociedades en el período 2009-2011 corresponden a ayudas, tales ayudas resultan ilegales en la medida en que no han sido debidamente notificadas y se han puesto en marcha antes de que la Comisión las declarase compatibles.
- (10) La Comisión recibió seis denuncias – presentadas el 23 de marzo de 2009, el 9 de diciembre de 2009, el 21 de diciembre de 2009, el 6 de enero de 2010, el 27 de setiembre de 2010 y el 12 de octubre de 2010 – que se referían a varias medidas de ayuda que el Estado italiano habría concedido a las sociedades del ex Grupo Tirrenia, especialmente en lo que respecta a las compensaciones que se pagaron como obligaciones de servicio público erogadas después de la vencida de las convocatorias iniciales (cfr. punto (11)), a las medidas de ayuda adicionales contenidas en diversos actos legislativos adoptados en el contexto del proceso de

⁽³⁾ El ex Grupo Tirrenia consistía en Tirrenia di Navigazione S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A., Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.A. y Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A..

⁽⁴⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pág. 1.

privatizzazione delle società e ad alcune questioni concernenti il processo di privatizzazione delle società. Ai fini della presente decisione, la Commissione ha tenuto conto delle informazioni fornite dai denuncianti.

2. DESCRIZIONE DEI FATTI

2.1. Le convenzioni iniziali

- (11) Lo Stato italiano possedeva il Gruppo Tirrenia attraverso la società Fintecna - Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A (in seguito, *Fintecna*)⁽⁵⁾, che comprendeva inizialmente sei società, ossia Tirrenia di Navigazione, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar, che fornivano servizi di trasporto marittimo sulla base di contratti separati di servizio pubblico conclusi con lo Stato italiano nel 1991 e rimasti in vigore per 20 anni, dal gennaio 1989 al dicembre 2008 (in seguito, *le convenzioni iniziali*). Fintecna deteneva il 100 % del capitale azionario di Tirrenia, la quale, a sua volta, era proprietaria dell'intero capitale delle società regionali Caremar, Siremar, Saremar e Toremar⁽⁶⁾.
- (12) Tali contratti di servizio pubblico avevano lo scopo di garantire la regolarità, l'affidabilità e la continuità dei suddetti servizi di trasporto marittimo, che per la maggior parte collegano l'Italia continentale con Sicilia, Sardegna e altre isole italiane minori. A tal fine, lo Stato italiano concedeva aiuti finanziari in forma di sovvenzioni corrisposte direttamente a ciascuna delle società del gruppo.
- (13) Il 6 agosto 1999 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, in merito agli aiuti corrisposti alle sei società del Gruppo Tirrenia sulla base delle convenzioni iniziali.
- (14) Durante la fase istruttoria, le autorità italiane hanno chiesto che l'esame del dossier del Gruppo Tirrenia venisse scorporato al fine di prevenire, in via prioritaria, a una decisione finale riguardante l'impresa Tirrenia. Tale richiesta era motivata dalla volontà delle autorità italiane di procedere alla privatizzazione del gruppo cominciando proprio dal Tirrenia e dall'intento di accelerare detto processo in riferimento a questa impresa.
- (15) La Commissione decideva di poter accogliere la richiesta delle autorità italiane e con la decisione 2001/851/CE del 21 giugno 2001 chiudeva il procedimento riguardante gli aiuti concessi a Tirrenia⁽⁷⁾ (in seguito, *la decisione del 2001*). Gli aiuti venivano dichiarati compatibili a condizione che le autorità italiane assumessero determinati impegni.

⁽⁵⁾ Fintecna è interamente controllata dal Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze ed è specializzata nella gestione di partecipazioni azionarie e processi di privatizzazione; si occupa altresì di processi di razionalizzazione e ristrutturazione di imprese che si trovino in difficoltà industriali, finanziarie o organizzative.
⁽⁶⁾ Dopo l'adozione della decisione del 2004, Tirrenia di Navigazione è stata fusa con Adriatica.
⁽⁷⁾ GU L 318 del 4.12.2001, pag. 9.

(16) Con la decisione 2005/163/CE del 16 marzo 2004⁽⁸⁾ (in seguito, *la decisione del 2004*) la Commissione stabiliva che le compensazioni concesse dall'Italia alle società del Gruppo Tirrenia diverse dalla società Tirrenia erano parzialmente compatibili con il mercato interno, parzialmente compatibili a condizione che le autorità italiane rispettassero alcuni impegni e parzialmente incompatibili con il mercato interno. La decisione, basata su dati contabili relativi al periodo 1992 – 2001, conteneva alcune condizioni volte a garantire la compatibilità della compensazione per tutta la durata delle convenzioni iniziali.

- (17) Con la sentenza del 4 marzo 2009 nelle cause T-265/04, T-292/04 e T-504/04⁽⁹⁾ (in seguito, *la sentenza del 2009*), il Tribunale di primo grado annullava la decisione del 2004 della Commissione.
- (18) La presente decisione non pregiudica il procedimento in corso avviato ai sensi dell'articolo 266 del TFUE al fine di conformarsi alla sentenza del 2009 relativa alle compensazioni accordate alle società dell'ex Gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia, fino alla data di scadenza delle convenzioni iniziali, ovverosia fino al dicembre 2008.

2.2. Riorganizzazione del Gruppo Tirrenia e proroga delle convenzioni iniziali

- (19) Le convenzioni iniziali sono state concluse per un periodo di vent'anni compreso tra il gennaio 1989 e il dicembre 2008. Successivamente, esse sono state prorate fino alla conclusione del processo di privatizzazione delle società del gruppo, tramite l'adozione dei seguenti atti legislativi:
 - (a) il decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito in legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che ha disposto la proroga delle convenzioni iniziali fino alla fine del 2009;
 - (b) l'articolo 19ter del decreto-legge n. 135/2009, convertito in legge n. 166/2009 (in seguito, *la legge del 2009*) che ha disposto la proroga delle convenzioni iniziali fino al 30 settembre 2010, data entro la quale l'Italia intendeva concludere il processo di privatizzazione delle società del Gruppo Tirrenia e
 - (c) la legge n. 163 del 1º ottobre 2010 di conversione del decreto-legge n. 125 del 5 agosto 2010 (in seguito, *la legge del 2010*) che ha disposto un'ulteriore proroga delle convenzioni iniziali fino alla fine del processo di privatizzazione.

⁽⁸⁾ GU L 53 del 26.2.2005, pag. 29.

⁽⁹⁾ Cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, Tirrenia di navigazione contro Commissione, Racc. 2009, pag. II-21.

(20) Secondo la legge italiana, la proroga delle convenzioni italiane fino al completamento del processo di privatizzazione delle società dell'ex Gruppo Tirrenia si giustifica con la necessità di assicurare le condizioni per la migliore valorizzazione delle società in vista della loro privatizzazione⁽¹⁰⁾.

(21) Il processo di riorganizzazione del Gruppo Tirrenia ha comportato l'approvazione di nuove convenzioni e nuovi contratti di servizio pubblico con le società dell'ex Gruppo Tirrenia e, successivamente, l'indizione di una gara d'appalto per la privatizzazione delle società, di cui i nuovi contratti costituiscono parte integrante. Le nuove convenzioni / i nuovi contratti di servizio pubblico verrebbero stipulati all'atto del completamento del processo di privatizzazione di ciascuna delle società dell'ex Gruppo Tirrenia⁽¹¹⁾.

2.2.1. *Tirrenia e Siremar*

(22) Il 23 dicembre 2009, Fintecna ha pubblicato il primo invito a manifestare interesse per la vendita dell'intero capitale azionario di Tirrenia e della sua controllata Siremar. Il 4 agosto 2010, dopo il fallimento delle trattative con l'unico soggetto che aveva presentato un'offerta vincolante, Fintecna dichiarava chiusa la procedura.

(23) Dopo il fallimento del primo tentativo di privatizzazione, nell'agosto e nel settembre 2010, le società, che versavano in gravi difficoltà finanziarie, sono state ammesse alla procedura collettiva di insolvenza prevista dalla legge italiana per le grandi imprese, ovverosia la procedura di amministrazione straordinaria, e sono state dichiarate insolventi dal tribunale competente.

(24) Il secondo invito a presentare proposte è stato pubblicato il 15 settembre per Tirrenia e, separatamente, il 4 ottobre 2011 per Siremar.

(25) La privatizzazione di Tirrenia e Siremar è avvenuta tramite la vendita delle aziende in attività soggette all'obbligo di fornire il servizio pubblico nonché, per quanto riguarda Tirrenia, servizi forniti sulle rotte non gestite nell'ambito del regime di servizio pubblico stabilito dalle convenzioni iniziali, conformemente alle disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004 n. 39 (in seguito, *la legge Marzano*) e successive modifiche.

2.2.2. *Le società regionali*

(26) Carema, Saremar e Toremar sono state trasferite alle Regioni e, secondo la legge italiana, dovrebbero essere privatizzate⁽¹²⁾. Attualmente, la Commissione non possiede informazioni sufficienti sullo stato di avanzamento della procedura di privatizzazione delle società in questione.

⁽¹⁰⁾ Articolo 19ter, paragrafo 6, della legge del 2009.

⁽¹¹⁾ Articolo 19ter, paragrafo 10, della legge del 2009.

⁽¹²⁾ In seguito al trasferimento alle Regioni della partecipazione azionaria delle società regionali, il Gruppo Tirrenia è composto da Tirrenia e Siremar.

2.3. Ambito di applicazione della decisione

2.3.1. *La compensazione corrisposta alle società dell'ex Gruppo Tirrenia per il periodo 2009-2011 (misura 1)*

(27) Come indicato ai punti (4) e (5), la notifica riguarda soltanto le compensazioni corrisposte dall'Italia a Caremar, Saremar e Toremar nel quadro della proroga delle convenzioni iniziali scadute alla fine del 2008.

(28) Lo scopo della misura notificata è garantire la continuità dei servizi forniti dai beneficiari per soddisfare le esigenze di mobilità delle comunità locali e di sviluppo sociale ed economico delle regioni insulari.

(29) Tuttavia, poiché anche le convenzioni iniziali con Tirrenia e Siremar sono state prorogate simultaneamente, in virtù degli stessi atti legislativi indicati di seguito, anche la compensazione corrisposta a tali società per la gestione del servizio pubblico nel periodo 2009-2011 è soggetta alla presente decisione.

2.3.1.1. *Base giuridica nazionale*

(30) In sintesi, le disposizioni pertinenti del quadro legislativo nazionale che sta alla base degli aiuti finanziari di Stato per l'esecuzione dei servizi di trasporto marittimo da parte di Caremar, Saremar, Toremar, Tirrenia e Siremar sono le seguenti:

Legge n. 856/1986

(31) La legge 5 dicembre 1986 n. 856 Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato, che ha disposto alcune modifiche del regime degli obblighi di servizio pubblico marittimo (in seguito, *regime OSP*).

(32) Per quanto riguarda i collegamenti con le isole maggiori e minori, l'articolo 11 della suddetta legge ha modificato i criteri di calcolo della compensazione di servizio pubblico. Infatti, conformemente alla lettera d), la sovvenzione di equilibrio doveva essere calcolata sulla base della differenza tra i proventi e i costi del servizio, facendo riferimento a parametri medi obiettivi e tenendo conto di un adeguato rendimento del capitale investito. I contratti di servizio pubblico dovevano comprendere dettagli specifici in merito agli elementi di costo da prendere in considerazione nel calcolo, nonché l'elenco delle rotte sovvenzionate. Le sovvenzioni erano soggette all'approvazione dei ministri della Marina mercantile, delle Partecipazioni statali e del Tesoro.

Articolo 26 del decreto-legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009

(33) L'articolo 26 del decreto-legge n. 207/2008 convertito in legge n. 14/2009 ha disposto la proroga fino alla fine del 2009 delle convenzioni iniziali concluse da ciascuna società dell'ex Gruppo Tirrenia con lo Stato italiano.

La legge del 2009

(34) L'articolo 19ter della legge del 2009 ha stabilito che, in vista della privatizzazione delle società del Gruppo Tirrenia, la partecipazione azionaria delle società regionali (ad eccezione di Siremar) fosse trasferito da Tirrenia nel modo seguente:

- (a) Caremar alla Regione Campania. Successivamente, la Regione Campania avrebbe trasferito alla Regione Lazio la società incaricata di assicurare i collegamenti di trasporto con l'Arcipelago Pontino;
- (b) Saremar alla Regione Sardegna;
- (c) Toremar alla Regione Toscana.

(35) La legge del 2009 ha inoltre specificato che sarebbero state concluse nuove convenzioni tra lo Stato italiano e Tirrenia e Siremar entro il 31 dicembre 2009. Allo stesso modo, i servizi regionali sarebbero stati inclusi in contratti di servizio pubblico, da concludere tra Saremar, Toremar e Caremar con le autorità regionali rispettivamente entro il 31 dicembre 2009 e il 28 febbraio 2010. Le nuove convenzioni/i nuovi contratti di servizio pubblico sarebbero stati stipulati all'atto del completamento del processo di privatizzazione di ciascuna delle società dell'ex Gruppo Tirrenia⁽¹³⁾.

(36) A tal fine, la legge del 2009 ha prorogato fino al 30 settembre 2010 la validità delle convenzioni iniziali.

(37) Il massimale della compensazione annua per la prestazione dei servizi offerti nell'ambito delle convenzioni iniziali, prorogate, nonché ai sensi delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio pubblico, è stato fissato in un importo totale di 184 942 251 euro nel 2010, ripartito come segue:

Tabella 1

Massimali della compensazione nel 2010

Impresa	Compensazione annua
Tirrenia	EUR 72 685 642
Siremar	EUR 55 694 895
Saremar	EUR 13 686 441
Toremar	EUR 13 005 441
Caremar	EUR 29 869 832, di cui EUR 19 839 226 dalla Regione Campania e EUR 10 030 606 dalla Regione Lazio

(38) Inoltre, il paragrafo 19 della legge stabilisce che un ulteriore finanziamento pubblico pari a 7 milioni di EUR

⁽¹³⁾ Articolo 19ter, paragrafo 10, della legge del 2009.

verrà stanziato per garantire l'ammodernamento della flotta del Gruppo Tirrenia al fine di soddisfare gli standard di sicurezza marittima.

(39) Ai sensi del paragrafo 21 della legge, le società dovrebbero mantenere anche l'attracco già assegnato e la priorità nell'assegnazione di nuovi posti/container (slot), conformemente alle procedure stabilite dalle autorità marittime, secondo quanto disposto dalla legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e dal codice marittimo.

La legge del 2010

(40) L'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 5 agosto 2010 n. 125 (in seguito, D.L. 125/2010) ha stabilito che, per fare fronte alle esigenze di cassa, le società dell'ex Gruppo Tirrenia possano utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, come previsto dall'articolo 19, comma 13-bis del decreto-legge n. 78/2009 convertito in legge 102/2009 e l'articolo 19-ter della legge del 2009.

(41) L'articolo 19, paragrafo 13bis del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge 102/2009 ha stabilito, inter alia, che 49 milioni di euro delle risorse statali rese disponibili dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007, che ammontano rispettivamente a 50 milioni di euro e a 14,5 milioni di euro, fossero concessi alle società dell'ex Gruppo Tirrenia come compensazione per assolvere determinati obblighi di servizio pubblico nel 2009, nonché per l'aggiornamento della flotta al fine di rispettare gli standard di sicurezza.

(42) Inoltre, l'articolo 1 della legge del 2010, che converte il D.L. n. 125/2010 prevede tra l'altro quanto segue:

- (a) le convenzioni iniziali vengono prolungate a partire dal 1º ottobre 2010 fino al termine del processo di privatizzazione;
- (b) l'articolo 19ter del decreto legge 135/2009 (in seguito D.L. 135/2009), convertito con modifiche nella legge del 2009, viene modificato. Viene introdotta una disposizione che ammette al beneficio dell'esenzione fiscale tutte le operazioni svolte nell'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 15 della legge 2009;
- (c) al fine di garantire la continuità del servizio pubblico e sostenere il processo di privatizzazione delle società dell'ex Gruppo Tirrenia, le regioni interessate possono ricorrere alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (in seguito, FAS)⁽¹⁴⁾, in conformità della direttiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica (in seguito, CIPE) n. 1/2009 del 6 marzo 2009, GURI n. 137 del 16 giugno 2009.

⁽¹⁴⁾ Il Fondo aree sottoutilizzate è un fondo nazionale che sostiene l'attuazione della politica regionale italiana. Le risorse di cui dispone sono stanziate principalmente a favore delle regioni in cui vi sono aree ritenute tali dalle autorità italiane.

2.3.1.2. Obblighi di servizio pubblico

- (43) L'articolo 1 delle convenzioni iniziali concluse nel 1991, successivamente prorogate nelle modalità illustrate in dettaglio al punto (19), prevedeva l'individuazione nell'ambito di piani quinquennali dei porti da servire, del tipo di imbarcazioni da utilizzare e della frequenza del servizio richiesta.
- (44) Tuttavia, nel quadro della procedura in corso di cui al punto (18), le autorità italiane hanno informato la Commissione che in luogo di adottare piani quinquennali per i periodi 2000-2004 e 2005-2008, sono state adottate misure di razionalizzazione ad hoc finalizzate a rendere i servizi più consoni alle esigenze delle comunità locali, senza però modificare in misura sostanziale il sistema del servizio pubblico. Le autorità italiane hanno dichiarato che non era stato più possibile fare una pianificazione a più lungo termine a causa della mancanza di una previsione di bilancio dei fondi richiesti.

2.3.1.3. Beneficiari

2.3.1.3.1. *Caremar*

- (45) Caremar gestisce una rete di collegamenti marittimi tra i porti del golfo di Napoli (Napoli, Sorrento e Pozzuoli) e le isole di Capri, Ischia e Procida e tra il continente e l'arcipelago Pontino.
- (46) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, Caremar non svolge attività commerciali non sovvenzionate.
- (47) Caremar ha 293 dipendenti e un fatturato annuo di 60 milioni di EUR.

2.3.1.3.2. *Saremar*

- (48) Saremar gestisce esclusivamente collegamenti di cabotaggio locale tra la Sardegna e le isole a nord-est e sud-ovest della Sardegna, nonché un collegamento internazionale tra Sardegna e Corsica.
- (49) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, Saremar non opera su rotte estranee all'ambito di applicazione del sistema di servizio pubblico.
- (50) Saremar ha 160 dipendenti e un fatturato annuo di 21 milioni di EUR.

2.3.1.3.3. *Toremar*

- (51) Toremar gestisce una rete di collegamenti marittimi nell'arcipelago Toscano, tra il continente e le isole di Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa e Giglio.
- (52) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, Toremar non svolge attività commerciali non sovvenzionate dallo Stato.
- (53) Toremar ha 181 dipendenti e un fatturato annuo di 37,6 milioni di EUR.

2.3.1.3.4. *Tirrenia e Siremar*

- (54) Come indicato in precedenza, le successive proroghe delle convenzioni iniziali valevano anche per Tirrenia e Siremar.
- (55) Le autorità italiane non hanno comunicato alla Commissione se tali società gestiscono collegamenti marittimi al di fuori del regime di servizio pubblico. Tuttavia, le informazioni disponibili in questa fase (cfr. l'invito a manifestare interesse relativo a Tirrenia, punto (266)) indicano che Tirrenia attualmente gestisce alcune rotte marittime a condizioni puramente commerciali. Inoltre, nel 2006 Adriatica è stata fusa con Tirrenia. In precedenza, Adriatica gestiva una serie di rotte tra Italia e Grecia, Albania e Croazia.

2.3.1.4. Bilancio e durata

- (56) Come specificato ai precedenti punti (4) e (5), le autorità italiane hanno notificato le compensazioni corrisposte a Caremar, Saremar e Toremar nel periodo 2009-2011.

- (57) Gli importi notificati previsti dalla misura sono i seguenti:

Tabella 2

Sovvenzioni annuali per il periodo 2009-2011 (EUR)

	2009	2010	2011
Caremar	32,47 milioni	28,32 milioni	28,32 milioni
Saremar	13,17 milioni	12,33 milioni	12,33 milioni
Toremar	13,5 milioni	12,33 milioni	12,33 milioni

- (58) Come indicato, non avendo notificato le compensazioni destinate a Tirrenia e Siremar, le autorità italiane non hanno fornito alla Commissione la ripartizione annuale dei fondi pubblici che tali società hanno diritto a ricevere per la gestione del servizio pubblico nel periodo 2009-2011.

2.3.1.5. Fallimento del mercato⁽¹⁵⁾

2.3.1.5.1. *Caremar*

2.3.1.5.1.1. Collegamenti di cabotaggio marittimo nel golfo di Napoli

- (59) Come già indicato, nel golfo di Napoli Caremar gestisce rotte marittime di collegamento tra l'Italia continentale e le isole di Capri, Ischia e Procida. Le autorità italiane sottolineano che per questi servizi la domanda è molto alta a causa dell'elevato numero di residenti insulari che si recano sul continente per ragioni professionali o di studio.

⁽¹⁵⁾ Tale capitolo si basa sulle informazioni fornite dalle autorità italiane.

(60) In particolare:

- sulla rotta Capri-Sorrento il beneficiario fornisce durante tutto l'anno servizi misti (passeggeri, automobili e camion) con frequenza giornaliera. Secondo le autorità italiane, nessun altro operatore fornisce servizi simili su questa rotta, perché gli operatori privati erogano principalmente servizi di trasporto rapido di passeggeri.
- Sulla rotta Capri-Napoli Caremar assicura durante tutto l'anno servizi misti con frequenza giornaliera ed è l'unico operatore a garantire anche servizi di trasporto merci verso l'isola. Pertanto, su questa rotta gli altri operatori forniscono esclusivamente servizi di trasporto rapido di passeggeri. Le autorità italiane sostengono che su questa linea Caremar assicura la prima corsa quotidiana in partenza dall'isola, rispondendo alle esigenze di mobilità essenziale delle comunità insulari. Le autorità italiane sottolineano inoltre che, su questa rotta, Caremar fornisce soltanto servizi misti e che pertanto lo Stato italiano ha cessato la corresponsione di compensazioni per i servizi di trasporto rapido di passeggeri, in conformità della decisione del 2004. Caremar ha l'obbligo di garantire la permanenza notturna dell'imbarcazione a Capri.
- Sulle rotte Ischia-Procida-Napoli e Ischia-Procida-Pozzuoli Caremar fornisce servizi misti.

(61) Le autorità italiane sottolineano che, su tali rotte, Caremar è stata tradizionalmente l'unico esercente a offrire una fermata transitoria a Procida nel percorso da e verso Ischia. Secondo le autorità italiane, questa sosta aggiuntiva comporta sia un aumento dei costi operativi sia un tempo di percorrenza complessivo molto più lungo (superiore all'incirca del 50 % rispetto al collegamento diretto). Sempre secondo le autorità italiane, Caremar è l'unica società a collegare l'isola di Procida con Pozzuoli e Napoli sul continente e con l'isola d'Ischia. Le autorità italiane sostengono che la gestione di queste rotte è essenziale per le comunità locali perché i residenti di Ischia devono recarsi a Procida per motivi di studio mentre i residenti di Procida hanno accesso permanente alle strutture sanitarie a Ischia.

(62) Inoltre, le autorità italiane dichiarano che nel 2007, a seguito di ripetute richieste da parte delle comunità insulari, la Regione Campania ha istituito due collegamenti notturni supplementari (servizi misti) sulle seguenti rotte:

- Napoli-Procida-Ischia
- Ischia-Procida-Pozzuoli.

(63) Le autorità italiane rilevano che nessun operatore privato si era offerto di fornire questi servizi su una base puramente commerciale. Di conseguenza, la gestione di questi servizi è stata data in appalto e i servizi sono attualmente

forniti in regime OSP da un operatore privato, al quale è stato imposto l'obbligo di praticare le stesse tariffe ridotte per determinate categorie di passeggeri che sono applicate da Caremar. Si sostiene pertanto che solo i servizi forniti da tale operatore privato sono paragonabili a quelli del beneficiario in quanto questi rappresenta l'unica impresa privata a servire la linea con una fermata transitoria a Procida. Viene sottolineato, inoltre, che per la gestione di questa rotta, l'operatore privato riceve una compensazione da parte delle autorità regionali.

(64) Infine, le autorità italiane sottolineano che esistono differenze essenziali tra i servizi forniti da Caremar e quelli forniti dagli operatori privati sulle linee Napoli-Ischia e Pozzuoli-Ischia:

- (a) i servizi assicurati da Caremar prevedono sempre una tappa transitoria a Procida mentre gli operatori privati forniscono per lo più collegamenti diretti (le uniche eccezioni sono i collegamenti notturni effettuati da un operatore privato). Le rotte dirette Napoli-Ischia e Pozzuoli-Ischia sono gestite da numerosi operatori privati. Gli obblighi di servizio pubblico sono stati imposti in tal senso dalla Regione.
- (b) In secondo luogo, i servizi prestati da Caremar sono stati basati su una convenzione con lo Stato italiano e, a partire dal 30 settembre 2010, ai sensi dell'articolo 19ter della legge del 2009, su un nuovo contratto di servizio pubblico concluso dalla Regione Campania⁽¹⁶⁾. Per contro, i servizi erogati dagli operatori privati si basano sugli obblighi di servizio pubblico assunti unilateralmente dagli operatori stessi. Secondo le autorità italiane, la prestazione del servizio pubblico da parte di questi ultimi potrebbe essere conclusa in qualunque momento con un preavviso di 60 giorni.
- (c) In terzo luogo, le tariffe applicate da Caremar sono imposte dalle autorità pubbliche sia nei confronti dei residenti insulari e dei residenti nel continente che lavorano sull'isola che degli altri passeggeri e si applicano anche al trasporto di veicoli (auto e camion). Al contrario, agli operatori privati sono stati imposti degli obblighi per quanto riguarda le tariffe soltanto nei confronti dei residenti e delle persone che lavorano sull'isola. Le tariffe applicate agli altri passeggeri e quelle per il trasporto di veicoli sono stabilite in autonomia dall'operatore privato.
- (d) Infine, le autorità italiane sottolineano il fatto che nel caso di Caremar, l'orario resta essenzialmente invariato per tutto l'anno, indipendentemente dalla stagione. Al contrario, l'orario degli operatori privati evidenzia un notevole squilibrio tra bassa e alta stagione, in particolare tramite un incremento dei servizi di punta.

⁽¹⁶⁾ Tuttavia, l'articolo 1 della legge n. 163 del 1º ottobre 2010, di conversione del D.L. n. 125/2010, prevede la proroga delle convenzioni iniziali dal 1º ottobre 2010 alla fine del processo di privatizzazione.

(65) Le autorità italiane affermano che il collegamento passeggeri Napoli-Ischia è l'unica linea gestita simultaneamente da operatori pubblici e privati. Sempre secondo le autorità italiane, due operatori privati forniscono servizi marittimi su questa rotta: Medmar, con servizi misti, e Ali-lauro, con servizi esclusivamente passeggeri. Le autorità italiane hanno confermato che Medmar offre anche servizi misti sulla rotta Ischia-Pozzuoli.

(66) Le autorità italiane sottolineano che, su questa rotta, Caremar fornisce servizi passeggeri in orari essenziali per l'interesse pubblico, mirando a garantire la continuità territoriale. In effetti, le autorità italiane affermano che la gestione della rotta Napoli-Ischia è chiaramente non praticabile a livello commerciale in quanto il numero medio di passeggeri trasportati va da 51 a 82 per traversata, per quanto riguarda i collegamenti rapidi, e da 133 a 31 per traversata per i servizi misti, pertanto rappresenta soltanto fino al 25 % della capacità della nave. Inoltre, l'imbarcazione veloce è obbligata a rimanere sull'isola durante la notte per garantire la permanenza in caso di emergenza medica.

(67) Per quanto riguarda la gestione del servizio passeggeri Napoli-Procida, le autorità italiane sottolineano che l'imbarcazione veloce è obbligata a rimanere sull'isola durante la notte in caso di emergenza medica. Inoltre, Caremar assicura la prima corsa quotidiana in partenza dall'isola, consentendo in tal modo lo spostamento sul continente dei residenti insulari per ragioni professionali o di studio.

2.3.1.5.1.2. Collegamenti di cabotaggio marittimo nell'arcipelago Pontino

(68) Il beneficiario è, in linea di principio, l'unico esercente che assicura durante tutto l'anno il collegamento delle isole di Ponza e Ventotene con il continente.

(69) Le autorità italiane sottolineano le peculiarità geografiche ed economiche dell'arcipelago Pontino. In particolare, le autorità italiane sottolineano che la distanza tra le isole e il continente e la scarsità della popolazione rendono quest'ultima estremamente dipendente dal continente, sia per gli approvvigionamenti che per le necessità di base.

(70) In particolare:

- sulla rotta Ponza-Formia Caremar gestisce due collegamenti giornalieri con servizi misti e un collegamento giornaliero solo con servizio passeggeri. La nave, lasciando l'isola alle 5,30 del mattino, garantisce ai residenti il collegamento con il continente per motivi di studio o di lavoro (con ultimo ritorno alle ore 17,30) Secondo le autorità italiane, Caremar assicura l'unico servizio rapido ed è costretta a mantenere la nave sull'isola durante la notte.

- Sulla linea Anzio-Ponza il beneficiario assicura un servizio misto giornaliero rapido in alta stagione da lunedì al sabato. Di domenica e nei giorni festivi il

servizio è potenziato. Il servizio è giustificato da motivi di sviluppo sociale ed economico (essendo il turismo, fondamentalmente, l'unica fonte di reddito dell'isola).

- Sulla linea Ventotene-Formia Caremar assicura tutto l'anno un servizio giornaliero tramite unità miste e un collegamento giornaliero rapido per passeggeri fuori stagione (dal 1º gennaio al 30 marzo e dal 1º gennaio al 31 dicembre) che viene incrementato in alta stagione (dal 1º aprile al 30 settembre). Il servizio misto è, anche in questo caso, l'unico collegamento regolare per il trasporto di passeggeri, merci e veicoli durante tutto l'anno. L'unità veloce parte alle 6,45 del mattino, consentendo ai residenti di recarsi sul continente per ragioni professionali o di studio, e rimane durante la notte sull'isola per assicurare la permanenza in caso di emergenza medica.

2.3.1.5.1.3. Conclusioni

(71) Le autorità italiane sottolineano che mantenere la nave sull'isola durante la notte rappresenta un ulteriore obbligo di servizio pubblico imposto soltanto a Caremar e che nessun operatore privato offrirebbe in normali condizioni di mercato. Le autorità italiane sostengono pertanto che la concessione di una compensazione per servizio pubblico è necessaria allo scopo di garantire un servizio regolare su tutte le linee sopra descritte e che la gestione delle linee suddette alle stesse condizioni non verrebbe assicurata da operatori provvisti su basi esclusivamente commerciali.

2.3.1.5.2. Toremar

(72) Toremar assicura collegamenti nell'arcipelago Toscano per garantire la continuità territoriale tra il continente e le isole di Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa e Giglio.

(73) Su alcune rotte Toremar opera in concorrenza con gli operatori privati. Le autorità italiane sottolineano il fatto che, al contrario degli operatori privati, Toremar è l'unica impresa ad operare in regime di servizio pubblico e a ricevere una compensazione per i servizi offerti. In tal senso, le autorità italiane dichiarano che la missione pubblica è giustificata in relazione alle esigenze di mobilità delle comunità insulari, nonché dai flussi turistici estivi tra il continente e l'isola.

(74) Su alcune rotte, però, Toremar non ha praticamente correnti.

2.3.1.5.2.1. Isola d'Elba

(75) Durante tutto l'anno, Toremar garantisce i seguenti collegamenti più di una volta al giorno:

- Piombino – Portoferaio. Su tale rotta, Toremar fornisce servizi misti. Le autorità italiane confermano che su questa rotta Toremar opera in concorrenza con due imprese private.

— Piombino - Rio Marina - Porto Azzurro-Pianosa Su questa rotta Toremar è l'unico esercente a garantire servizi misti più di una volta al giorno per il porto di Rio Marina e collegamenti settimanali con il porto di Pianosa. Attualmente, il collegamento con Porto Azzurro è sospeso per motivi tecnici.

— Piombino – Cavo – Portoferraio. Su questa rotta Toremar garantisce l'unico collegamento rapido per passeggeri.

(76) Le autorità italiane sostengono che Toremar è l'unico operatore a essere costantemente presente sulle linee sudette tutto l'anno a ore essenziali per le comunità insulari, consentendo in tal modo ai residenti di recarsi sul continente per ragioni professionali o di studio.

2.3.1.5.2.2. Isole di Gorgona e Capraia

(77) Toremar assicura tutto l'anno servizi misti verso Livorno, con due fermate settimanali nell'isola di Gorgona e almeno una al giorno sull'isola di Capraia.

(78) Le autorità italiane informano che dal 2005 il collegamento con Capraia è offerto anche da un operatore privato che comunque fornisce un servizio passeggeri soltanto in luglio e agosto. Dato lo scarso numero di abitanti che vivono sull'isola d'inverno e la distanza dal continente la permanenza del servizio è ritenuta essenziale per consentire ai residenti di soddisfare le necessità di base.

2.3.1.5.2.3. Isola del Giglio - Porto S. Stefano

(79) Su questa rotta, Toremar garantisce tutto l'anno più di un collegamento quotidiano. Il servizio è gestito in concorrenza con un'impresa privata. Le autorità italiane sostengono tuttavia che il beneficiario offre il servizio a orari essenziali per il pubblico interesse, consentendo un trasferimento affidabile da e verso l'isola. In questo senso, si sostiene che il servizio non possa essere svolto da operatori privati sulla base di considerazioni puramente commerciali.

2.3.1.5.3. **Saremar**

(80) Saremar assicura i collegamenti tra la Sardegna e le isole minori situate a nord-est e a sud-ovest dell'isola maggiore, nonché un collegamento internazionale tra Sardegna e Corsica.

(81) Più specificamente, Saremar fornisce servizi misti sulle seguenti rotte di cabotaggio:

— La Maddalena - Palau

— Carloforte - Portovesme

— Carloforte – Calasetta.

(82) Saremar gestisce inoltre la rotta internazionale che collega S. Teresa di Gallura (Sardegna) con Bonifacio (Corsica).

2.3.1.5.3.1. Rotte di cabotaggio

(83) Sulla rotta La Maddalena-Palau il beneficiario assicura tutto l'anno 21 collegamenti giornalieri (servizi misti). La prima partenza da La Maddalena è prevista alle 7,00 di mattina, mentre l'ultimo traghetto parte da Palau alle 19,30. Su questa rotta Saremar utilizza due traghetti costruiti appositamente per ridurre al minimo i tempi di carico e scarico di un numero elevato di automobili e camion.

(84) Le autorità italiane sottolineano che Saremar opera su questa rotta da oltre 70 anni⁽¹⁷⁾. Inoltre, esse informano che già nel 2006 Saremar aveva ridotto del 25 % il numero dei collegamenti giornalieri su questa rotta⁽¹⁸⁾ a causa della presenza sul mercato di esercenti privati.

(85) Secondo le autorità italiane, tre operatori privati forniscono servizi marittimi su questa stessa rotta: Enermar, Maddalena Ferry e Delcomar. Le autorità italiane sostengono che quest'ultimo riceve una compensazione dalla Regione per i servizi prestati su tale rotta tra mezzanotte e le 5,30 di mattina.

(86) Sulla rotta Carloforte-Portovesme, Saremar garantisce 17 collegamenti giornalieri durante la stagione estiva (prima partenza alle 5,00 da Carloforte e ultima corsa di ritorno alle 24,00) e 15 collegamenti giornalieri nel resto dell'anno (prima partenza alle 5,00 da Carloforte e ultima corsa di ritorno alle 22,20). Secondo le autorità italiane, Saremar è l'unico esercente presente con continuità su questa rotta durante tutto l'anno.

(87) Le autorità italiane evidenziano altresì che questa rotta è essenziale sia per i turisti sia per i residenti sull'isola e sul continente perché Portovesme gode di collegamenti migliori con l'autostrada per Cagliari (porto e aeroporto) e per Porto Torres e Olbia (porto e aeroporto). Inoltre, le autorità italiane sottolineano l'importanza di questa rotta ai fini dell'integrazione col trasporto pubblico, ovverosia con i servizi di autobus gestiti da ARST S.p.A., di proprietà delle autorità regionali sarde.

(88) Sulla rotta Carloforte-Calasetta, Saremar assicura nove collegamenti giornalieri durante la stagione estiva (prima partenza alle 6,55 e ultima corsa di ritorno alle 20,20) e, nel resto dell'anno, sette collegamenti giornalieri (prima partenza alle 6,55 e ultima corsa di ritorno alle 17,50), con una corsa aggiuntiva nei giorni festivi.

(89) Su questa rotta Saremar utilizza due traghetti (Arbatax e Maddalena) con capacità di trasporto di 20 automobili e 178 passeggeri.

⁽¹⁷⁾ Fino al 1987 la rotta era gestita da Tirrenia di Navigazione S.p.A.

⁽¹⁸⁾ Secondo le autorità italiane, in precedenza il piano quinquennale fissava a 28 collegamenti giornalieri la frequenza dei servizi di Caremar sulla rotta La Maddalena-Palau.

(90) Le autorità italiane affermano che su questa rotta Saremar opera in concorrenza con un operatore privato, Delcomar, che vi impiega un traghetto. Delcomar garantisce inoltre collegamenti integrativi notturni tra le 18,45 e le 5,15, ricevendo dalle autorità regionali una congrua compensazione.

(91) Le autorità italiane considerano questa rotta di grandissima importanza sotto il profilo della continuità territoriale e fanno presente che il porto di Portovesme è constantemente esposto a forti venti da sud e da est, che rendono più difficile la navigazione in condizioni di sicurezza, sicché la rotta Carloforte-Calasetta diventa l'unica alternativa disponibile.

2.3.1.5.3.2. La rotta internazionale

(92) Sulla rotta S. Teresa di Gallura (Sardegna) - Bonifacio (Corsica) il beneficiario assicura due/tre collegamenti giornalieri (servizi misti) tutto l'anno. Nessun altro esercente eroga servizi paragonabili su questa rotta; l'unico concorrente privato opera infatti esclusivamente in alta stagione (da aprile a settembre).

(93) Le autorità italiane sottolineano che Tirrenia è attiva su questa rotta dal 1937, essendo la rotta inserita nell'elenco delle rotte di interesse nazionale istituito con il regio decreto n. 2081 del 7 dicembre 1936. Dopo la costituzione di Saremar quale società regionale di Tirrenia, in forza dell'articolo 15 della legge n. 856/1986, la gestione della rotta è stata affidata a Saremar.

(94) Le autorità italiane sottolineano che, in alta stagione (da aprile a settembre), Saremar utilizza un solo traghetto per fornire il servizio. Di conseguenza, Saremar può trovarsi obbligata, per mancanza di sufficiente capacità, ad invitare i potenziali passeggeri con automobile al seguito a rivolgersi al concorrente privato.

(95) Secondo le autorità italiane, i servizi forniti da Saremar in bassa stagione, quando è l'unico operatore attivo sulla rotta, sono essenziali per il trasporto di camion, soprattutto di quelli che trasportano materiali da costruzione, legname, sughero e pesce. Grazie a questo servizio, i camion possono partire da S. Teresa di Gallura (Sardegna) alle 7,30 il lunedì, mercoledì e venerdì e farvi ritorno partendo da Bonifacio (Corsica) alle 17,00, dopo aver consegnato la merce in diverse città corse.

(96) Inoltre, le autorità italiane rilevano che i servizi erogati da Saremar su questa rotta sono di primaria importanza per facilitare l'accesso dalla Corsica alla Sardegna, garantendo così la mobilità dei lavoratori sardi oltre confine.

(97) Infine, a dimostrazione dell'importanza del sostegno ai servizi forniti da Saremar su questa rotta, le autorità italiane citano il programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Francia "Isole", adottato dalla Commissione per promuovere uno sviluppo equilibrato e l'integrazione del territorio europeo.

2.3.1.5.4. **Tirrenia**

2.3.1.5.4.1. Genova – Porto Torres

(98) La rotta Genova – Porto Torres è gestita da Tirrenia in regime di servizio pubblico soltanto in bassa stagione. Secondo le autorità italiane, su tale rotta gli operatori privati, pur attivi sia in alta stagione che in bassa stagione, non offrono un servizio comparabile sotto il profilo della frequenza. In effetti, Tirrenia fornisce servizi giornalieri con partenze serali da entrambi i porti, secondo un orario prestabilito, per garantire un collegamento affidabile alla rete ferroviaria sarda.

(99) Un concorrente offre collegamenti tutto l'anno, garantendo, in bassa stagione, soltanto tre partenze alla settimana e una partenza giornaliera in alta stagione e non offrendo partenze serali da entrambi i porti. Un altro concorrente opera soltanto in alta stagione. I suoi servizi non possono pertanto essere considerati paragonabili a quelli forniti da Tirrenia.

(100) Le autorità italiane sostengono quindi che Tirrenia sia il solo operatore in grado di garantire la continuità territoriale.

2.3.1.5.4.2. Genova – Olbia - Arbatax

(101) Tirrenia garantisce i collegamenti sulla rotta Genova – Olbia – Arbatax tutto l'anno in regime di servizio pubblico ed è esposta alla concorrenza degli operatori privati soltanto in alta stagione.

(102) Gli operatori privati gestiscono la rotta soltanto quattro mesi all'anno (da giugno a settembre), senza collegamento con Arbatax.

2.3.1.5.4.3. Civitavecchia - Olbia

(103) La rotta Civitavecchia - Olbia è gestita da Tirrenia in regime di servizio pubblico soltanto in bassa stagione.

(104) Lungo tale rotta, gli operatori privati operano soltanto in alta stagione (da giugno a settembre), garantendo partenze giornaliere (notturne) da entrambi i porti.

2.3.1.5.4.4. Napoli - Palermo

(105) La rotta Napoli - Palermo è gestita da Tirrenia in regime di servizio pubblico soltanto in bassa stagione. Durante tutto l'anno, Tirrenia offre un servizio giornaliero (notturno), secondo un orario prestabilito.

(106) Le autorità italiane sostengono che l'unico concorrente, SNAV, non garantisce gli standard qualitativi richiesti e riduce periodicamente la frequenza del servizio per effettuare interventi di manutenzione della flotta. Secondo le autorità italiane, il servizio fornito da SNAV su questa linea non può quindi essere considerato conforme ai requisiti di continuità, regolarità e qualità.

2.3.1.5.4.5. Altre rotte (servizi misti)

- (107) Sulle rotte Civitavecchia – Arbatax – Cagliari, Napoli – Cagliari, Palermo – Cagliari, Trapani – Cagliari e Termoli - Isole Tremiti non sono presenti altri operatori.

2.3.1.5.4.6. Rotte per il trasporto merci

- (108) Lungo la rotta Livorno/Genova – Cagliari, Tirrenia fornisce servizi di trasporto merci tutto l'anno, cinque volte alla settimana. Il servizio offerto dai concorrenti si limita ad una partenza settimanale e viene sospeso durante l'alta stagione e le vacanze di Natale.
- (109) Sulle rotte Napoli – Cagliari e Ravenna – Catania non operano imprese private.

2.3.1.5.5. *Siremar*

- (110) Secondo le autorità italiane, i concorrenti di Siremar sulle rotte gestite in base alla convenzione iniziale, poi prorogata, sono operatori selezionati dalla Regione tramite procedure di gare aperte. Questi ultimi offrono i seguenti servizi:

Tabella 3

Servizi forniti dai concorrenti di Siremar

Servizio	Operatore
Collegamento rapido (isole Eolie)	Ustica Lines
Servizio misto (isole Eolie)	NGI
Servizio misto (isole Egadi)	Traghetti del Mediterraneo
Collegamento rapido (isole Egadi)	Ustica Lines
Servizio misto (isola di Pantelleria)	Traghetti del Mediterraneo
Servizio misto (Ustica)	NGI
Collegamento rapido (arcipelago delle Pelagie e Ustica)	Ustica Lines
Collegamento rapido in alta stagione (arcipelago delle Pelagie)	Ustica Lines

2.3.1.6. Le sovvenzioni

2.3.1.6.1. Compensazione concessa nel 2009

- (111) Nel 2009 la compensazione per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico è stata concessa in conformità del regime in vigore alla fine del 2008. La compensazione corrispondeva alla perdita netta accumulata sui servizi gestiti in regime di servizio pubblico, cui è stato aggiunto un importo variabile corrispondente al rendimento del capitale investito.

- (112) Ai sensi delle convenzioni iniziali, per il calcolo della compensazione stabilita dalle autorità pubbliche sono

stati presi in considerazione i seguenti elementi di costo: costi di acquisizione, pubblicità e alloggio, costi di carico, scarico e manovra, costo per il personale amministrativo a terra, costi di mantenimento della nave, costi amministrativi, costi di assicurazione, costi per il noleggio e l'affitto, costi per il carburante, imposte e ammortamenti.

- (113) Il rendimento del capitale investito è stata calcolata in base ai tassi d'interesse bancari e ai tassi di prestito di riferimento medi per i crediti navali.

2.3.1.6.2. Compensazioni concesse nel 2010 e 2011

- (114) La compensazione corrisposta per la gestione del servizio pubblico a partire dal 2010 è stata calcolata in base alla nuova metodologia da applicare dopo l'entrata in vigore delle nuove convenzioni e dei nuovi contratti di servizio pubblico di cui al punto (35). Il metodo di calcolo della compensazione per servizio pubblico è illustrato in dettaglio nella direttiva CIPE del 9 novembre 2007 (in seguito, la direttiva CIPE), GURI n. 50 del 28 febbraio 2008.

- (115) Secondo la direttiva CIPE, la combinazione della portata dei servizi forniti, dei vincoli tariffari dettagliati nel punto (118) e del livello della compensazione di servizio pubblico è tale da assicurare la copertura dell'operatore di servizio pubblico della totalità dei costi ammissibili. Più specificamente, si applica la formula seguente:

$$VA(RSP) + VA(AI(X)) = VA(CA)$$

dove

— $VA(RSP)$ è il valore scontato della compensazione per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico

— $VA(AI(X))$ è il valore scontato di altre entrate (tariffe e altro)

— $(VA(CA))$ è il valore scontato dei costi di gestione ammissibili, del rimborso del debito e del rendimento del capitale investito.

- (116) La direttiva CIPE stabilisce che, qualora non potesse essere utilizzata la formula precedente, verrebbe ridotta la portata delle attività sovvenzionate o, in alternativa, verrebbero rivisti i beni o modificati i vincoli tariffari.

- (117) Gli elementi di costo presi in considerazione ai fini del calcolo della compensazione sono definiti come segue:

1) Costi operativi

(a) costi direttamente collegati alla gestione del servizio pubblico (ovvero personale direttamente impiegato, apparecchiature direttamente utilizzate, manutenzione);

(b) costi indirettamente collegati alla gestione del servizio pubblico, quale la percentuale rilevante dei costi generali.

2) *Costi di investimento e rendimento del capitale investito.* Al fine di calcolare la compensazione da erogare per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, risultano ammissibili i costi indicati di seguito:

- (a) costi di rimborso del capitale investito, tenuto conto dell'ammortamento;
- (b) congruo rendimento del capitale investito, determinata moltiplicando il capitale investito netto per il tasso stabilito di rendimento del capitale investito.

Tariffe

(118) La tariffa massima applicabile per ciascun servizio pubblico, al netto di imposte e diritti portuali, è adeguata annualmente in base alla seguente formula per il calcolo del massimale dei prezzi:

$$\Delta T = \Delta P - X$$

dove

- ΔT è la variazione percentuale annua della tariffa massima
- ΔP è il tasso di inflazione previsto per l'anno di riferimento
- X è un tasso annuo reale di adeguamento delle tariffe massime, stabilito nelle convenzioni e nei contratti di servizio pubblico, che rimane costante per l'intera durata del periodo di regolamentazione ed è differenziato per i diversi servizi.

(119) La direttiva CIPE specifica inoltre che è possibile aggiungere un ulteriore contributo alla tariffa massima per riflettere l'andamento dei costi del carburante, prendendo come riferimento i prezzi standard disponibili pubblicamente. Inoltre, le convenzioni / i contratti di servizio pubblico possono prevedere ulteriori componenti in aggiunta o in diminuzione alla tariffa massima in ragione del livello di raggiungimento di obiettivi di qualità del servizio, quantitativamente misurabili e predeterminati nei contratti stessi.

Rendimento del capitale investito

(120) Il tasso di rendimento del capitale investito è calcolato sulla base al costo medio ponderato del capitale, al lordo delle imposte:

$$r = (1 - g) \frac{k_e}{1 - T_e} + g \frac{k_d(1 - T_{rs})}{1 - T_e}$$

dove $k_e = k_f + B * k_r$

$$k_d = k_f + k_p$$

e

— g : rapporto del debito sul capitale

— k_e : costo del capitale

— k_d : costo del debito

— k_f : privo di rischio

— k_r : premio di rischio

— B : beta

— K_p : premio al debito

— T_{rs} : aliquota fiscale sul debito

— T_e : imposta nominale.

(121) Il costo del debito è definito dalla somma del tasso di rendimento di attività prive di rischio e del premio al debito. Il tasso di rendimento di attività prive di rischio corrisponde al rendimento lordo medio sui bond decennali di riferimento, in relazione ai 12 mesi precedenti per i quali esistono dati disponibili. Il premio al debito è determinato a partire dai valori di mercato indicati da un'analisi di settore.

(122) Il costo del capitale proprio è calcolato applicando un premio al tasso di rendimento delle attività prive di rischio, calcolato come premio conosciuto per il capitale di rischio moltiplicato per un beta che riflette il rischio non diversificabile che caratterizza l'attività svolta dall'operatore.

(123) Il beta è valutato a partire dalla correlazione tra il rendimento previsto sul mercato azionario e il rendimento previsto sul capitale di rischio per un gruppo di società con un profilo di rischio paragonabile, per quanto riguarda la posizione finanziaria standard. In mancanza di ciò, il beta viene stimato tramite il beta standard di mercato.

(124) Il premio stabilito per il capitale di rischio è pari al 4 %. Tuttavia, nel caso di un servizio che non viene effettuato su base esclusiva, il maggior rischio sostenuto dall'operatore è remunerato tramite l'aggiunta di 2,5 punti percentuali supplementari al premio di rischio.

2.3.1.6.2.1. Caremar

(125) Nel 2009 il livello di rendimento del capitale investito era del 6,3 %.

(126) Per il 2010, il tasso di rendimento del capitale investito è stato fissato al 9,6 %, in base alla formula riportata di seguito:

Rendimento del capitale investito (al lordo delle imposte) 2010	
Tasso esente da rischio	[...] (*) %
Premio di rischio	[...] %
Beta	[...]
Aliquota fiscale	[...] %
Costo del capitale proprio – CoRC (lordo)	[...] %
Tasso esente da rischio	[...] %
Spread (premio al debito)	[...] %
Totale	[...] %
Aliquota fiscale sul debito ([...] %)	[...] %
Aliquota fiscale ([...] % + [...] %)	[...] %
Costo del debito – CoD (lordo)	[...] %
(A) - Patrimonio netto/(passività + patrimonio netto)	[...] %
(B) - Passività /(Passività + patrimonio netto)	[...] %
Rendimento del capitale investito – RoIC (lordo)	9,6 %

(*) Informazioni coperte dal segreto professionale.

$$\text{RoIC} = (\text{CoRC} * \text{A}) + (\text{CoD} * \text{B}) = ([...] \% * [...] \%) + ([...] \% * [...] \%) = 9,6 \%$$

- (127) Le autorità italiane hanno chiarito che nel 2010 il rendimento del capitale investito (a un tasso del 9,6 %) precede le imposte. Viceversa, il rendimento per il 2009 (a un tasso del 6,3 %) era al netto delle imposte che, in base alla nuova metodologia, erano considerate costi ammissibili. Per maggiore completezza, le autorità italiane sottolineano che, se nel 2009 fosse stato utilizzato il metodo stabilito per il 2010, il rendimento sarebbe stato del 9,00 % (cfr. la tabella riportata di seguito).

Rendimento del capitale investito nel 2009	
Tasso esente da rischio	[...] %
Premio di rischio	[...] %
Beta	[...]
Aliquota fiscale	[...] %
Costo del capitale proprio – CoRC (lordo)	[...] %
Tasso esente da rischio	[...] %
Spread (premio al debito)	[...] %
Totale	[...] %
Aliquota fiscale sul debito [...] %	[...] %
Aliquota fiscale ([...] % + [...] %)	[...] %

Rendimento del capitale investito nel 2009	
Costo del debito – CoD (Cost of debt) (lordo)	[...] %
(A) – Patrimonio netto/(passività + patrimonio netto)	[...] %
(B) – Passività/(passività finanziarie + patrimonio netto)	[...] %
Rendimento del capitale investito – ROIC (lordo)	9,0 %

$$\text{ROIC} = (\text{CoRC} * \text{A}) + (\text{CoD} * \text{B}) = ([...] \% * [...] \%) + ([...] \% * [...] \%) = 9,0 \%$$

2.3.1.6.2.2. Toremar

- (128) Nel 2009 il livello di rendimento del capitale investito era del 5,46 %.
- (129) Nel 2010, il tasso di rendimento del capitale investito è stato fissato al 9,95 %, in base alla formula riportata di seguito:

Rendimento del capitale investito (al lordo delle imposte) nel 2010	
Tasso esente da rischio	[...] %
Premio di rischio	[...] %
Beta	[...]
Aliquota fiscale	[...] %
Costo del capitale proprio – CoRC (lordo)	[...] %
Tasso esente da rischio	[...] %
Spread (premio al debito)	[...] %
Totale	[...] %
Aliquota fiscale sul debito ([...] %)	[...] %
Aliquota fiscale ([...] % + [...] %)	[...] %
Costo del debito - CoD (lordo)	[...] %
(A) – Patrimonio netto/(passività + patrimonio netto)	[...] %
(B) – Passività/(passività + patrimonio netto)	[...] %
Rendimento del capitale investito - ROIC (lordo)	9,95 %

- (130) Nel 2010 il rendimento del capitale investito precede le imposte. Viceversa, il rendimento per il 2009 (a un tasso del 5,46 %) era al netto delle imposte che, in base alla nuova metodologia, erano considerate costi ammissibili.

2.3.1.6.2.3. Saremar

- (131) Nel 2009 il livello di rendimento del capitale investito era del 3,88 %.

- (132) A partire dal 2010, il rendimento del capitale investito è stato fissato al 9,72 %, sulla base della formula riportata di seguito:

Rendimento del capitale investito (al lordo delle imposte) nel 2010	
Tasso esente da rischio	[...] %
Premio di rischio	[...] %
Beta	[...]
Imposta applicabile	[...] %
Costo del capitale di rischio – CoRC (lordo)	[...] %
Tasso esente da rischio	[...] %
Spread (premio al debito)	[...] %
Totale	[...] %
Aliquota fiscale sul debito ([...] %)	[...] %
Imposta applicabile ([...] % + [...] %)	[...] %
Costo del debito - CoD (lordo)	[...] %
(A) Patrimonio netto/(passività + patrimonio netto)	[...] %
(B) Passività/(passività + patrimonio netto)	[...] %
Rendimento del capitale investito - ROIC (lordo)	9,72 %

- (133) Nel 2010 il rendimento del capitale investito precede le imposte. Viceversa, il rendimento per il 2009 (a un tasso del 3,88 %) era al netto delle imposte sul reddito societario che, in base alla nuova metodologia, erano considerate costi ammissibili.

2.3.1.6.2.4. Tirrenia e Siremar

- (134) Le autorità italiane non hanno informato la Commissione in merito al livello di compensazione corrisposta a Tirrenia e a Siremar per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico durante il periodo 2009-2011.

2.3.2. Privatizzazione di Tirrenia e Siremar (misura 2)

- (135) La descrizione della procedura di vendita contenuta nei punti seguenti, nonché la successiva valutazione disposta nei punti (258) - (277) e (316) - (318) riportati di seguito riguarda unicamente la privatizzazione di Tirrenia e Siremar. In base alle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, la privatizzazione delle società regionali dell'ex Gruppo Tirrenia è attualmente in corso, e non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione.

- (136) Secondo quanto affermato in precedenza, in seguito al fallimento del primo tentativo di privatizzare le società,

sia Tirrenia che Siremar sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria disposta dalla legge Marzano, e successive modifiche.

- (137) Secondo le autorità italiane, la privatizzazione di Tirrenia e Siremar è stata effettuata attraverso la vendita delle società autorizzate a fornire il servizio pubblico, in seguito alla procedura disposta dall'articolo 4, paragrafo 4-quater, della legge Marzano, e successive modifiche.

2.3.2.1. Procedura di amministrazione straordinaria

- (138) A differenza della normale procedura fallimentare, il cui scopo è liquidare la società insolvente per soddisfare le richieste dei creditori, la procedura di amministrazione straordinaria, stabilita con decreto legge n. 270 dell'8 luglio 1999 (¹⁹) è una procedura specifica di insolvenza per grandi aziende insolventi destinata a tutelare il patrimonio della società assicurando la continuità, ripresa o conversione dell'attività produttiva.

- (139) La gestione della società insolvente viene trasferita al commissario o ai commissari straordinari. Questi ultimi proporranno un piano di rilancio dell'attività in questione, tramite la ristrutturazione o la vendita del patrimonio della società insolvente. Il Ministero competente può chiedere eventuali chiarimenti, modifiche o integrazioni al programma redatto dal commissario o dai commissari. Il piano è soggetto alla previa autorizzazione del Ministero, tenuto conto del parere di un Consiglio di sorveglianza (composto da esperti nominati dal Ministero stesso).

- (140) La legge Marzano, ovvero il decreto legge n. 347 del 23 dicembre 2003 che stabilisce misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, convertito tramite modifiche in legge n. 39 del 18 febbraio 2004, disciplina la procedura di amministrazione straordinaria che si applica alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione di cui al punto precedente e soddisfano, congiuntamente, alcuni requisiti concernenti il numero dei lavoratori subordinati nell'esercizio precedente e i debiti totali dell'impresa.

- (141) La procedura richiede che la società insolvente presenti una richiesta al Ministro delle attività produttive e una contestuale comunicazione al tribunale fallimentare competente. Il Ministro decide in merito all'ammissione della società insolvente alla procedura e nomina il commissario straordinario sotto la supervisione del consiglio di sorveglianza, mentre il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell'impresa.

⁽¹⁹⁾ Il cosiddetto decreto Prodi-bis.

(142) Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deve presentare un programma di ristrutturazione al Ministro. La procedura ordinaria di fallimento viene avviata soltanto nel caso in cui il suddetto programma di ristrutturazione non sia approvato dal Ministro e non sia possibile attuare la procedura di vendita del patrimonio.

(143) Il decreto legge 134/2008⁽²⁰⁾ (in seguito, D.L. 134/2008) ha introdotto diverse modifiche alla legge Marzano. Tali modifiche trovano applicazione alle imprese che forniscono servizi pubblici essenziali, tra cui la possibilità che il commissario straordinario individui un acquirente del patrimonio dell'impresa tramite una procedura di negoziazione con le parti che garantisca la continuità del servizio pubblico a medio termine e un intervento rapido. Il prezzo di vendita non può essere inferiore a quello di mercato dei beni, come stabilito da un esperto indipendente nominato tramite decreto ministeriale. L'articolo 4, paragrafo 4-quater, della legge Marzano, modificata dal D.L. 134/2008 recita:

"Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, [...] il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico."

(144) Inoltre, il D.L. 134/2008 ha introdotto la possibilità di presentare la domanda di ammissione alla procedura in alternativa al Presidente del Consiglio dei Ministri e non soltanto al Ministro. È prevista la possibilità di presentare domanda per la procedura di cui sopra al fine di perseguire, nell'immediato, un piano di smaltimento, a differenza del regime precedente, che richiedeva che venisse presentato prima un piano di ristrutturazione al Ministro. Ai sensi del D.L. 134/2008 la procedura di fallimento ordinaria viene avviata nel caso in cui non sia possibile attuare o far approvare dal Ministro né un piano di dismissione dei beni né un piano di ristrutturazione.

2.3.2.2. Vendita di beni

(145) Secondo le autorità italiane, le diverse fasi della procedura ai sensi della legge Marzano sono:

(a) pubblicazione dell'invito a manifestare interesse;

(b) *invito alla due diligence*: dopo aver valutato l'osservanza dei requisiti stabiliti nell'invito, il commissario straordinario invia a tutte le parti ammesse alle fasi successive un avviso di ammissione, in cui sono indicate le modalità e i tempi per il completamento della due diligence;

(c) *due diligence*: le parti interessate all'acquisto ammesse alla fase di due diligence hanno accesso a tutte le informazioni tecniche, legali e finanziarie relative ai beni in questione, comprese inter alia, in questo caso, le informazioni riguardo ai beni soggetti alla procedura di vendita e ai progetti di convenzioni da firmare con gli offerenti prescelti; al completamento della due diligence, viene trasmesso un avviso supplementare alle parti ammesse, in cui sono indicati i termini e le modalità applicabili alla presentazione e alla valutazione delle offerte vincolanti;

(d) *Scadenza per la valutazione dell'esperto indipendente nominato dal Ministro*:

(e) *Presentazione delle offerte vincolanti (prima fase) e del piano d'impresa*: l'ammissione di acquirenti potenziali alla fase finale è soggetta (i) alla presentazione a un'offerta superiore al valore stabilito dall'esperto indipendente per i beni in questione; e (ii) alla valutazione positiva del piano d'impresa presentato e, in questo caso, della conformità delle ipotesi sottostanti agli obblighi di servizio pubblico stabiliti dalle nuove convenzioni;

Secondo le autorità italiane, in questo caso il piano d'impresa doveva includere:

a. la presentazione delle rotte e delle frequenze conformemente agli obblighi di servizio pubblico stabiliti dalle nuove convenzioni;

b. le tariffe previste;

c. le navi da utilizzare su ogni rotta e i potenziali ritiri o acquisti di nuove navi e il relativo arco temporale.

(f) *Seconda fase della due diligence*: al completamento della due diligence, alle parti ammesse viene inviato un ulteriore avviso in cui vengono indicati i termini e le modalità applicabili alla presentazione e alla valutazione dell'offerta vincolante;

(g) *presentazione delle offerte vincolanti (seconda fase)*: gli offerenti possono presentare le offerte aumentate, di non più del 10%; nel caso in cui sia ammessa più di un'offerta alla fase finale, viene selezionata l'offerta più conveniente;

(h) selezione e chiusura della trattativa.

⁽²⁰⁾ Articolo 4 (4-quater) del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito in legge n. 166 del 27 ottobre 2008, relativo a "Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi", la cosiddetta nuova legge Marzano.

- (146) Secondo le informazioni presentate dalle autorità italiane, i tempi delle fasi principali della procedura in questo caso sono state le seguenti:

Tabella 4

Procedure di vendita

Fasi della procedura	Tirrenia	Siremar
Pubblicazione dell'invito a manifestare interesse	15 settembre 2010	4 ottobre 2010
Lettere d'intenti ricevute	21	5
Invito alla due diligence	10 novembre 2010 (16 parti)	24 novembre 2010 (5 parti)
Due diligence (dettagli sull'oggetto della vendita, sulle nuove convenzioni e su tutte le informazioni finanziarie pertinenti messe a disposizione degli offertenzi)	26 novembre 2010	16 dicembre 2010
Invito a presentare un'offerta vincolante	2 febbraio 2011	2 febbraio 2011
Esperto nominato dal Ministro	4 febbraio 2011	4 febbraio 2011
Presentazione delle offerte vincolanti (seconda fase)	19 maggio 2010 Compagnia Italiana di Navigazione (CIN)	23 maggio 2010 Compagnia delle Isole Società di Navigazione Siciliana
Selezione e chiusura della trattativa	23 maggio 2011	—

2.3.3. Priorità di attracco (misura 3)

- (147) Come detto in precedenza, il paragrafo 21 della legge 2009 stabilisce che le società manterranno l'attracco già assegnato e la priorità nella ripartizione di nuovi posti/container in conformità con le procedure disposte dalle autorità marittime, come stabilito dalla legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e dal codice marittimo.

2.3.4. Misure previste dalla legge del 2010 che converte il decreto legge 125/2010 (misura 4)

- (148) Come già affermato, la legge del 2010 ha stabilito che ulteriori finanziamenti pubblici di 7 milioni di euro e di 49 milioni di euro, già stanziati per l'ammodernamento della flotta, sarebbero stati messi a disposizione delle società dell'ex Gruppo Tirrenia per coprire i costi di esercizio.

- (149) Inoltre, l'articolo 1 della legge 2010, che converte con modifiche il D.L. 125/2010, ha stabilito determinati vantaggi fiscali nel contesto del processo di privatizzazione, vale a dire il diritto all'esenzione fiscale per tutte le operazioni relative al processo di privatizzazione.

- (150) Inoltre, la legge 2010 dispone la possibilità per le società del Gruppo Tirrenia di avvalersi di risorse FAS per soddisfare le attuali esigenze di liquidità.

2.4. Le denunce

- (151) La Commissione ha ricevuto diverse denunce dai concorrenti in relazione alle varie misure intraprese dallo Stato italiano a favore delle società del Gruppo Tirrenia. Di seguito sono sintetizzate le principali asserzioni dei denunciati.

2.4.1. Misure disposte dalla legge del 2009

- (152) I denunciati sono operatori privati concorrenti delle società del Gruppo Tirrenia su alcune rotte servite da quest'ultima in regime di OSP. Essi sostengono essenzialmente che la legge del 2009 specifica tre misure di aiuto di Stato a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia. La maggior parte dei denunciati, tuttavia, si riferisce in effetti alle misure di sostegno stabilite dalla legge del 2009 a favore di Caremar.

- (153) I denunciati affermano sostanzialmente che le misure:

(a) violano il principio di trasparenza e non discriminazione stabilito dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (in seguito, "cabotaggio marittimo")⁽²¹⁾, tramite: a) la proroga (in assenza di gara) fino al 30 settembre 2010 delle convenzioni iniziali; b) la priorità nell'assegnazione di nuovi slot. Si afferma che la priorità nella ripartizione dei posti/container viene applicata a tutte le rotte servite dalle società, comprese quelle che non rientrano nell'ambito di applicazione del regime di servizio pubblico e conferisce alle società un vantaggio aggiuntivo che falsa la concorrenza;

(b) violano le norme sugli aiuti di Stato per i motivi seguenti: a) proroga al 30 settembre 2010 della compensazione a favore di Caremar per l'erogazione di servizi di cabotaggio marittimo; b) compensazione da assegnare nell'ambito del nuovo contratto di servizio pubblico da concludere con la Regione, per un massimo di dodici anni, per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico; c) priorità di attracco.

- (154) Inoltre, uno dei denunciati afferma che la durata dei nuovi contratti di servizio pubblico, fino a dodici anni, che le società regionali dell'ex Gruppo Tirrenia concluderanno con le Regioni per l'assolvimento di tali obblighi oltre il settembre 2010 è eccessiva.

- (155) Uno dei denunciati conclude che le compensazioni corrisposte a Caremar a partire dal 1º gennaio 2009 per l'esercizio dei collegamenti sulla rotta citata costituiscono nuovi aiuti concessi illegalmente.

⁽²¹⁾ GU L 364 del 12.12.1992.

(156) Per quanto riguarda in particolare i servizi attualmente gestiti da Caremar nell'ambito del regime di servizio pubblico, i denuncianti sostengono che la compensazione pagata per il funzionamento di alcune rotte nel Golfo di Napoli costituisce un aiuto di Stato incompatibile in quanto servizi simili sono forniti dal mercato a condizioni puramente commerciali. Pertanto, si sostiene che la gestione delle rotte in questione non possa essere considerata un vero e proprio servizio pubblico legittimo.

(157) In questo senso, un concorrente afferma che soltanto i seguenti obblighi imposti a Caremar non vengono attualmente assolti da operatori privati: la gestione di tre collegamenti giornalieri da Pozzuoli a Ischia con una fermata transitoria a Procida per mezzo di una nave tradizionale e un'unità veloce e la permanenza della nave sull'isola durante la notte. Inoltre, un denunciante sostiene che l'obbligo di permanenza della nave sull'isola durante la notte, introdotto diversi anni prima, è attualmente obsoleto, considerata l'attuazione del servizio pubblico medico effettuato in elicottero in caso di emergenza medica.

(158) Inoltre, uno dei denuncianti sostiene che potrebbe ragionevolmente presupporre di assicurare la gestione di entrambe le rotte Napoli-Capri e Napoli-Procida-Ischia alle stesse condizioni di Caremar, compreso l'obbligo di lasciare la nave nei porti dell'isola durante la notte, se ottenesse una compensazione adeguata.

(159) In ultima istanza, uno dei denuncianti sostiene che Caremar abusi della propria posizione dominante sul mercato per la gestione di servizi di trasporto misti per mezzo di tariffe eccessivamente basse, in conseguenza delle sovvenzioni statali che riceve.

2.4.2. Misure disposte dalla legge del 2010

(160) Due denuncianti citano le misure stabilite dalla legge del 2010 e affermano che l'articolo 1, paragrafo 1, del D.L. 125/2010 e l'articolo 1 della legge del 2010 equivalgono ad aiuto di Stato a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia.

(161) I denuncianti affermano che, in linea di principio, il finanziamento pubblico in questione corrisponde ad aiuti al funzionamento alle società dell'ex Gruppo Tirrenia in quanto verrà usato per coprire le perdite subite dalle società nella gestione dei servizi pubblici. I denuncianti affermano che questo finanziamento si aggiunge alla compensazione per servizio pubblico erogata alle società per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2.4.3. Privatizzazione

(162) Due denuncianti citano il processo di privatizzazione di Tirrenia e Siremar, lamentando soprattutto la mancanza di trasparenza della procedura.

(163) Uno dei denuncianti afferma che la gara d'appalto per la vendita dei beni di Tirrenia viola il principio di traspa-

renza e di non discriminazione imposto dal regolamento sul cabotaggio marittimo. Il denunciante sostiene fondamentalmente che la nuova gara d'appalto non è trasparente riguardo a:

- (a) oggetto della procedura e prezzo di vendita;
- (b) il campo di applicazione della futura convenzione tra Tirrenia e lo Stato italiano;
- (c) i criteri di selezione.

(164) Inoltre, un altro denunciante sostiene che la mancanza di trasparenza della procedura di vendita potrebbe favorire alcuni operatori nazionali dei trasporti già consolidati sul mercato.

3. POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE

3.1. La compensazione

(165) Secondo le autorità italiane i servizi specificati ai punti (59) – (110) riportati sopra costituiscono un vero e proprio servizio d'interesse economico generale in quanto mirano ad assicurare la continuità territoriale e i concorrenti non forniscono alcun servizio analogo in termini commerciali sulle rotte in questione.

3.2. Privatizzazione

(166) Come già affermato, ai sensi della legge del 2009, le società dell'ex Gruppo Tirrenia, a cui sono già state assegnate nuove convenzioni/contratti di servizio pubblico, sono in corso di privatizzazione.

(167) Per quanto riguarda le procedure per la vendita dei beni di Tirrenia e di Siremar, le autorità italiane dichiarano che tutti gli acquirenti potenziali sono stati trattati in modo uguale, non discriminatorio, considerato che:

- (a) le gare d'appalto sono state ampiamente pubblicizzate a mezzo stampa;
- (b) a tutti gli offerenti sono state fornite informazioni adeguate allo stesso livello durante la fase di due diligence;
- (c) la procedura è studiata in modo da garantire che venga corrisposto un prezzo di mercato per i beni soggetti alla vendita.

(168) Per quanto riguarda l'imposizione di condizioni di natura pubblica nella procedura di vendita, le autorità italiane affermano che non verrà effettuato alcun trasferimento automatico di dipendenti. Inoltre, affermano che l'unico obbligo legale imposto agli acquirenti è il mantenimento dei livelli della manodopera che assicura la continuità operativa dei servizi, nel pieno rispetto degli obblighi di servizio pubblico imposti dalle nuove convenzioni. Tale obbligo tuttavia è limitato a due anni e soltanto ai lavoratori indispensabili per il funzionamento dei servizi.

- (169) Le autorità italiane hanno indicato, inoltre, che il commissario straordinario ha definito chiaramente l'oggetto della vendita come il trasferimento dei beni (navi) e della manodopera corrispondente per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico in conformità con le nuove convenzioni. Pertanto si afferma che i beni che non sono necessari per fornire il servizio pubblico sulle rotte specificate sono stati esclusi dalla trattativa di acquisto.

3.3. Priorità di attracco

- (170) Le autorità italiane hanno sottolineato che la priorità di attracco può essere accordata esclusivamente in relazione alle rotte soggette al regime OSP e viene fornita nel pieno rispetto delle disposizioni della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e del codice marittimo.

3.4. Misure stabilite dalla legge del 2010 che ha convertito il D.L. 125/2010

- (171) Per quanto riguarda i 49 milioni di euro e gli ulteriori 7 milioni di euro per *l'aggiornamento della flotta* per rispettare gli standard di sicurezza, le autorità italiane hanno chiarito che sono stati assegnati complessivamente 23 750 000 euro alle cinque società, a seconda degli aggiornamenti richiesti dalla flotta, nel seguente modo:

Tabella 5

Sovvenzioni per l'aggiornamento della flotta

Società	Sovvenzioni (EUR)
Tirrenia	12 051 900
Caremar	2 115 000
Toremar	1 617 300
Siremar	7 215 800
Saremar	750 000

- (172) Secondo le autorità italiane, finora solo Tirrenia ha chiesto di utilizzare il finanziamento pubblico in questione per coprire le esigenze di liquidità e ha ricevuto a tale scopo 12 051 900 euro.
- (173) Per quanto riguarda specificatamente i 49 milioni di euro, le autorità italiane dichiarano che, poiché la misura fornisce alle società soltanto l'accesso al finanziamento già stanziato per altri scopi, al fine di far fronte alle limitazioni temporanee di liquidità, subordinatamente al risarcimento di tali risorse da parte della società in modo che possano essere utilizzate per il loro scopo originario, la misura non costituisce aiuto di Stato.

- (174) Per quanto riguarda l'utilizzo di 7 milioni di euro, le autorità italiane hanno chiarito che la misura mira a garantire la conformità agli obblighi imposti da varie direttive europee, che stabiliscono determinate modifiche tecniche obbligatorie alle navi, obbligatorie se la nave è utilizzata per fornire un servizio pubblico e/o è effettivamente messa in vendita nell'ambito della procedura di

privatizzazione. Le autorità italiane ritengono che, poiché mira ad assicurare la conformità alla legislazione UE ed è essenziale per garantire la continuità del servizio pubblico (la non attuazione di tali misure avrebbe presumibilmente comportato l'immediato ritiro completo di diverse navi, con una conseguente grave interruzione del servizio pubblico), la misura non rappresenta un aiuto di Stato.

- (175) Per quanto riguarda *l'esenzione fiscale*, le autorità italiane hanno chiarito quanto segue:

- (a) per quanto riguarda l'imposta sui redditi di impresa e l'IVA, la misura non è stata applicata poiché il trasferimento delle società alle Regioni non è stato remunerato ed è esente da IVA;
- (b) per quanto riguarda le altre imposte, gli effetti della legge possono essere considerati puramente simbolici.

- (176) Per quanto riguarda la *possibilità di utilizzare fondi del FAS*, l'Italia ritiene che non corrispondano ad aiuti di Stato, in quanto sono disponibili per le Regioni interessate per incentivare il completamento del processo di privatizzazione in corso e per garantire la continuità territoriale in attesa del risultato di questo processo.

- (177) Le autorità italiane affermano che finora nessuna Regione ha utilizzato i fondi del FAS a questo scopo.

4. VALUTAZIONE

4.1. Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (178) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che "sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

- (179) I criteri previsti dall'articolo 107, paragrafo 1, sono cumulativi; ne consegue che le misure notificate costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE solamente se sono soddisfatte tutte le condizioni succitate. In particolare, il sostegno finanziario deve:

- (a) essere concesso da uno Stato membro o attraverso risorse statali,
- (b) favorire talune imprese o talune produzioni,
- (c) falsare o minacciare di falsare la concorrenza,
- (d) incidere sugli scambi tra Stati membri.

4.1.1. La compensazione (misura 1)

(180) Risorse statali: poiché la misura notificata riguarda compensazioni economiche concesse ai beneficiari dallo Stato italiano, essa comporta l'utilizzo di risorse statali.

(181) Selettività: le sovvenzioni in questione vanno a beneficio soltanto di alcune imprese e, pertanto, sono selettive.

(182) Vantaggio economico: per giungere a una conclusione sulla possibilità che la compensazione per la gestione del servizio pubblico costituisca o meno un vantaggio ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, la Corte di giustizia ha stabilito i seguenti criteri nella propria sentenza nella causa Altmark (22):

1. l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro (in seguito, "Altmark 1");
2. i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente (in seguito, "Altmark 2");
3. la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento (in seguito, "Altmark 3");
4. quando, in un caso specifico, la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, o che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi (in seguito, "Altmark 4").

4.1.1.1. Altmark 1

(183) Non esiste una definizione uniforme e precisa di quale servizio può costituire un servizio d'interesse economico generale (in seguito, SIEG) ai sensi della legislazione UE, ai sensi della prima condizione nella causa Altmark o dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFEU (23).

(22) Causa C-280/00 Altmark Trans / Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. 2003, pag. 17747.

(23) Causa T-289/03 BUPA e altri contro Commissione, Racc. 2008, pag. II-81, punto 96. Cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Tizzano nella causa C-53/00 Ferring, Racc. pag. I-9069 e le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa C-126/01 GEMO, Racc. 2003, pag. I-13769.

(184) Il punto (22) della comunicazione della Commissione sui servizi di interesse economico generale in Europa (24) recita:

"La libertà di definizione significa che spetta fondamentalmente agli Stati membri definire che cosa considerino «servizi d'interesse economico generale», in funzione delle specifiche caratteristiche delle attività. Tale definizione può essere soggetta a controllo soltanto in caso di errore manifesto [...]"

Nei settori non specificamente disciplinati da una normativa comunitaria, gli Stati membri godono in un ampio margine di manovra per l'elaborazione delle politiche nazionali, che possono essere soggette a controllo soltanto in caso di errore manifesto. La competenza di decidere quale servizio debba essere considerato servizio d'interesse generale e come debba essere gestito pertiene in primo luogo al livello locale".

(185) Alla luce di quanto riportato sopra, la Commissione ritiene, essenzialmente, che le autorità nazionali siano autorizzate a considerare che determinati servizi sono di interesse generale e devono essere forniti per mezzo di obblighi di servizio pubblico quando le forze di mercato non sono sufficienti a garantire che siano forniti al livello o alle condizioni richieste. Pertanto, ad eccezione dei settori in cui sono in vigore le norme UE che regolano la materia, il compito della Commissione in tali casi è di garantire che questo margine di discrezione venga applicato senza errore manifesto per quanto riguarda la definizione di SIEG. Nell'ambito dei trasporti marittimi, il regolamento sul cabotaggio marittimo stabilisce norme dettagliate che disciplinano gli obblighi di servizio pubblico nell'UE.

(186) In questo caso, la missione pubblica definita dalle autorità italiane riguarda principalmente le rotte di cabotaggio verso le isole, che collegano per lo più l'Italia continentale ai porti delle isole. A esse si aggiunge una rotta internazionale gestita da Saremar. Secondo le autorità italiane, un servizio soddisfacente in termini di regolarità e di frequenza sulle rotte in questione è fondamentale per lo sviluppo economico delle isole e soddisfa al contempo le esigenze essenziali di mobilità delle comunità locali.

(187) I collegamenti di cabotaggio rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio e, allo scopo di esaminare i possibili aiuti di Stato, degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (in seguito, gli orientamenti marittimi) (25). La sezione 9 degli orientamenti marittimi specifica che *"possono essere imposti obblighi di servizio pubblico (OSP) o conclusi contratti di servizio pubblico (CSP) per i servizi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio"*, ovvero servizi programmati verso, da e tra le isole. La compensazione per la gestione di

(24) GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4.

(25) Comunicazione della Commissione C(2004)43 – Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.

tali servizi è pertanto soggetta alle norme indicate nella disposizione citata e alle norme sugli aiuti di Stato stabilite dal trattato e interpretate dalla Corte di giustizia. Dalla giurisprudenza consolidata risulta che gli obblighi di servizio pubblico possono essere imposti soltanto se rispondono a un'esigenza reale che non può essere soddisfatta dalle sole forze di mercato⁽²⁶⁾.

- (188) La comunicazione riguardante l'interpretazione del regolamento sul cabotaggio marittimo⁽²⁷⁾ conferma che "Spetta agli Stati membri (comprese, ove opportuno, le autorità regionali e locali) determinare su quali rotte sono necessari obblighi di servizio pubblico. In particolare, gli obblighi di servizio pubblico possono essere previsti per servizi di cabotaggio insulari regolari (di linea) qualora il mercato non assicuri servizi adeguati." Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sul cabotaggio marittimo definisce gli obblighi di servizio pubblico come gli obblighi che l'armatore comunitario, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni.
- (189) Di conseguenza la Commissione deve valutare se le convenzioni versate alle società dell'ex Gruppo Tirrenia sono concesse in relazione ai servizi che non sarebbero forniti alle normali condizioni di mercato nella stessa misura o a prezzi analoghi e se questi servizi rispondono a un'esigenza reale.
- (190) All'inizio, la Commissione riconosce che l'obiettivo perseguito nel caso in esame, ovvero assicurare l'adeguatezza dei servizi di trasporto marittimo regolari tra l'Italia continentale e le isole, può essere considerato di interesse generale.
- (191) La Commissione osserva, inoltre, che storicamente l'obiettivo di continuità territoriale perseguito dall'Italia non è stato realizzato attraverso l'interazione delle sole forze di mercato. Infatti, l'adeguatezza di questi servizi è stata assicurata tradizionalmente dagli obblighi di servizio pubblico imposti a tale effetto alle società dell'ex Gruppo Tirrenia e sanciti nelle convenzioni iniziali, successivamente prolungate, come specificato nei dettagli in precedenza.
- (192) Tuttavia, la Commissione deve valutare se i servizi sono orientati verso le esigenze attuali. Al fine di accertare l'esistenza e la portata degli obblighi di servizio pubblico imposti ai beneficiari, nonché la necessità di concedere a questi ultimi compensazioni economiche per i costi sostenuti nell'adempimento di tali obblighi, la Commissione

deve verificare se altri esercenti offrono servizi che sono simili a quelli forniti dai beneficiari e conformi agli obblighi previsti dall'atto di incarico.

- (193) In primo luogo, la Commissione osserva che in questo caso la compensazione per la gestione dei servizi marittimi nel 2009 è basata sulla proroga delle convenzioni iniziali concluse nel 1991, ai sensi delle leggi del 2009 e del 2010. Tuttavia, come detto in precedenza, le convenzioni iniziali hanno stabilito soltanto che gli obblighi di servizio pubblico relativi alle rotte e ai porti da servire, alla capacità delle navi assegnate ai collegamenti marittimi in questione, alla frequenza del servizio e alle tariffe sarebbero stati definiti dettagliatamente dai piani quinquennali.
- (194) Secondo quanto esposto nel punto (44) riportato sopra, non è stato adottato alcun programma per i periodi 2000-2004 e 2005-2008. Invece, secondo le autorità italiane, le modifiche agli obblighi imposti agli operatori sono state concordate ad-hoc. Alla Commissione non è stato fornito alcun documento di questo tipo che descrive la portata degli obblighi di servizio pubblico imposti. Di conseguenza, in questa fase la Commissione non può valutare in modo conclusivo se gli obblighi di servizio pubblico imposti ai beneficiari sono stati definiti chiaramente e se vi fosse una necessità reale di imporre obblighi per un servizio pubblico a tale riguardo.
- (195) In secondo luogo, la Commissione osserva che la compensazione per la gestione dei servizi a partire dal 2010 è stata calcolata in base alla nuova metodologia da applicarsi dopo l'entrata in vigore delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio pubblico citati nel punto (35) riportato sopra. Il metodo di calcolo della compensazione di servizio pubblico è stato spiegato dettagliatamente nella direttiva CIPE (cfr. il punto (114) riportato sopra). Quest'ultima in effetti specifica nei dettagli il contenuto delle nuove convenzioni/contratti di servizio pubblico e stabilisce che questi ultimi dovrebbero specificare chiaramente gli obblighi imposti ai beneficiari. Tuttavia, la Commissione osserva che questi contratti non sono ancora in vigore e che le leggi del 2009 e del 2010 non forniscono alcun dettaglio sugli obblighi imposti ai beneficiari a tale scopo.
- (196) In assenza di una definizione anteriore precisa del livello di servizi richiesti, la Commissione non può valutare pienamente se la definizione della missione di servizio pubblico riflette un'esigenza reale che non può essere soddisfatta dalle forze di mercato, ovvero in riferimento ai servizi concorrenti. Tuttavia, alla luce delle informazioni attualmente disponibili, sembra che la situazione sulle rotte in questione sia la seguente:

 - 4.1.1.1.1. **Caremar**
 - 4.1.1.1.1.1. Golfo di Napoli

- (197) Secondo le autorità italiane, sulle rotte Capri-Sorrento e Capri-Napoli, il beneficiario è l'unico operatore a fornire servizi misti tutto l'anno.

⁽²⁶⁾ Sentenza della Corte nella causa C-205/1999 Analir e a. Racc. 2001, pag. I-1271.

⁽²⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che aggiorna e rettifica la comunicazione riguardante l'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), COM(2003) 595 def., 22.12.2003.

- (198) Tuttavia, la Commissione osserva che alcune rotte servite da Caremar sono effettuate anche da imprese private. Sulle rotte in questione, infatti, la concorrenza non è un fenomeno recente. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, senza dubbio la concorrenza su alcune delle rotte nel Golfo di Napoli esisteva molto prima del 2008. In realtà, come sopra specificato, per quanto riguarda taluni dei servizi sovvenzionati, i denuncianti sostengono che non vi è alcuna necessità di imporre obblighi di servizio pubblico, dato che tali rotte sono attualmente servite in modo adeguato da imprese private che le gestiscono a livello commerciale e che offrono servizi simili in termini di frequenza, continuità, regolarità e tariffe.
- (199) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, sulle rotte Ischia – Procida - Napoli e Ischia – Procida - Pozzuoli, il beneficiario fornisce servizi di trasporto misti passeggeri e merci, con una sosta transitoria a Procida da e verso Ischia. Come indicato, le autorità italiane sostengono che fornisce servizi analoghi soltanto un altro operatore privato, il quale riceve una compensazione dalle autorità regionali. Le autorità italiane affermano che il servizio fornito dall'impresa di trasporto privata è complementare a quello fornito dal beneficiario ed è il risultato di una richiesta delle comunità dell'isola.
- (200) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, su questa linea la definizione di servizio pubblico è applicabile essenzialmente al collegamento tra Procida e il continente da un lato, e tra Procida e Ischia dall'altro. In effetti, la giustificazione delle autorità italiane per l'imposizione del regime OSP su questa rotta si basa in gran parte sull'importanza per le comunità locali del collegamento tra Procida e Ischia.
- (201) In base alle informazioni disponibili in questa fase, la Commissione osserva che sembra che nessun concorrente offra il trasporto merci sulle rotte Ischia – Procida - Napoli e Ischia – Procida - Pozzuoli in termini esclusivamente commerciali. Tuttavia, sembra che tali servizi siano forniti dai concorrenti sulle rotte dirette Ischia - Napoli e Procida - Napoli. Inoltre, la Commissione osserva che Procida è ben collegata al continente da entrambi gli operatori privati e dalla Caremar stessa. Dunque, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, sembrerebbe che gli unici servizi non forniti dalle libere forze di mercato siano il trasporto di merci sulla rotta Ischia-Pozzuoli e i servizi misti sulla rotta Ischia - Procida.
- (202) Per quanto riguarda l'imposizione di obblighi di servizio pubblico su queste rotte parallelamente al contratto di servizio pubblico concluso con Caremar, la Commissione ritiene che questa non possa essere considerata come un'indicazione del fatto che i servizi forniti da quest'ultima non siano effettivamente necessari. Infatti, nulla impedisce agli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico e di concludere contratti di servizio pubblico simultaneamente al fine di far fronte a un fallimento del mercato nella gestione di alcuni servizi. Il semplice fatto che siano stati imposti obblighi di servizio pubblico contemporaneamente a più operatori non può di per sé minare la legittimità della missione pubblica.
- (203) Tuttavia, in questa fase, risulta incerto, secondo la Commissione se il servizio fornito da Caremar su queste rotte costituisce un esclusivo interesse economico generale, tenuto conto del fatto che diversi operatori privati che operano sulle rotte adiacenti senza sovvenzione offrono servizi analoghi. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione solleva, pertanto, dubbi circa l'adeguatezza della portata del servizio pubblico definita dalle autorità italiane.
- (204) Il collegamento diretto Ischia-Napoli è gestito con navi ad alta velocità da Caremar e da diversi operatori privati. L'Italia sottolinea che su tale rotta Caremar offre servizi di trasporto passeggeri in orari essenziali per il pubblico interesse, al fine di garantire la continuità territoriale. Inoltre, il beneficiario è obbligato a mantenere la nave sull'isola durante la notte per garantire l'accesso permanente al continente in caso di emergenza medica. Sulla linea Procida-Napoli, si sostiene che Caremar assicura la prima corsa quotidiana in partenza dall'isola di Procida tutto l'anno, consentendo in tal modo lo spostamento dei residenti insulari per ragioni professionali o di studio. Analogamente alla linea Ischia-Napoli, l'unità veloce rimane sull'isola durante la notte.
- (205) Per quanto riguarda la gestione di queste due rotte, la Commissione non dispone, in questa fase, di informazioni sufficienti sull'esistenza di servizi analoghi. Le autorità italiane non hanno fornito informazioni sul tipo e sugli orari dei servizi offerti dai concorrenti.
- (206) Inoltre, la Commissione prende atto dell'affermazione delle autorità italiane secondo cui mantenere a disposizione la nave durante la notte rappresenta un obbligo supplementare, che nessun operatore privato fornirebbe in normali condizioni di mercato. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite dai denuncianti, la Commissione nutre dubbi circa la legittimità di considerare la permanenza nei porti dell'isola di notte un vero e proprio servizio pubblico e invita le autorità italiane a precisare se il trasporto mediante elicottero non possa essere utilizzato nel caso di alcune patologie e a fornire informazioni sulla disponibilità e la capacità di servizi alternativi di trasporto medico.
- 4.1.1.1.2. Arcipelago Pontino
- (207) Secondo le autorità italiane, sulle rotte Ponza-Formia, Anzio-Ponza e Ventotene-Formia Caremar è sostanzialmente l'unico operatore ad assicurare collegamenti affidabili durante tutto l'anno. È inoltre applicabile lo stesso obbligo per quanto riguarda la permanenza della nave nell'isola durante la notte. La Commissione osserva pertanto che non sembrano esistere servizi analoghi offerti da imprese concorrenti sulle rotte in questione.

4.1.1.1.3. Conclusione

- (208) Data la mancanza di una definizione precisa della missione relativa al servizio di interesse economico generale e pertanto del livello di servizi richiesti, così come di una chiara descrizione dei servizi forniti dalle imprese concorrenti sulle medesime rotte sopra esaminate, la Commissione non dispone in questa fase di informazioni sufficienti per stabilire se tale definizione riflette un'esigenza reale di servizio pubblico sulle rotte operate da Caremar nel Golfo di Napoli e nell'Arcipelago Pontino, che non possa essere soddisfatta dalle sole forze di mercato.

4.1.1.1.2. **Toremar**

4.1.1.1.2.1. Isola d'Elba

- (209) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, Toremar è l'unico operatore che fornisce servizi di collegamento marittimo sulla rotta Piombino-Rio Marina-Punto Azzurro-Pianosa. È inoltre l'unico operatore che fornisce servizi ad alta velocità sulla linea Piombino-Cavo-Portoferraio.
- (210) Tuttavia, sulla linea diretta Piombino-Portoferraio, Toremar opera in concorrenza con due operatori privati. Le autorità italiane sostengono che Toremar è l'unico operatore presente tutto l'anno, anche in bassa stagione. Inoltre, viene precisato che il beneficiario fornisce il servizio in orari essenziali per le comunità insulari.

- (211) Atteso che le autorità italiane non hanno sufficientemente chiarito gli obblighi imposti a Toremar per le citate rotte, la Commissione non dispone in questa fase di informazioni sufficienti per stabilire se i servizi offerti dai concorrenti possono essere considerati sostitutivi e conseguentemente se la missione di servizio pubblico imposta dall'Italia corrisponda ad un'esigenza reale che non può essere soddisfatta dalle sole forze di mercato.

4.1.1.1.2.2. Isole Gorgona e Capraia

- (212) Secondo le autorità italiane, Toremar è l'unico operatore a fornire servizi misti tutto l'anno sulle rotte per le isole di Capraia e Gorgona.

4.1.1.1.2.3. Isola del Giglio– Porto S. Stefano

- (213) Su questa rotta il servizio è gestito in concorrenza con un'impresa privata. Tuttavia, le autorità italiane sostengono che il beneficiario assicuri il servizio in orari essenziali per l'interesse pubblico, offrendo ai residenti un collegamento regolare con il continente.

- (214) Nella misura in cui non dispone, ad oggi, di informazioni sufficienti sugli obblighi effettivi di servizio pubblico imposti a Toremar e sui servizi offerti dai suoi concorrenti, la Commissione non può giungere ad una conclusione circa il fatto che la missione di servizio pubblico imposta dall'Italia soddisfi un'esigenza reale che non può essere soddisfatta dal solo operare delle forze di mercato.

4.1.1.1.2.4. Conclusione

- (215) In assenza di una chiara definizione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'operatore e dei servizi forniti dai suoi concorrenti, la Commissione non dispone di informazioni sufficienti per valutare se il servizio offerto da Toremar sulle citate rotte soddisfi una reale esigenza che non potrebbe essere soddisfatta dalle forze di mercato.

4.1.1.1.3. **Saremar**

4.1.1.1.3.1. Rotte di cabotaggio

- (216) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, sulla linea Carloforte - Portovesme, il beneficiario è l'unico operatore a fornire servizi misti tutto l'anno.

- (217) Tuttavia, la Commissione rileva che talune rotte gestite da Saremar sono anche gestite da imprese private. Secondo le informazioni presentate dalle autorità italiane, tre operatori privati sono presenti sulla linea La Maddalena - Palau, vale a dire Enermar, Maddalena Ferry e Delcomar. Per la prestazione dei collegamenti notturni da mezzanotte alle 5,30 quest'ultima riceve una compensazione dalla Regione.

- (218) Sulla rotta Carloforte-Calasetta, le autorità italiane sottolineano la presenza di un operatore privato, Delcomar, che fornisce anche collegamenti notturni dalle 18,45 alle 5,15. Per questi ultimi l'operatore è compensato dalla Regione.

- (219) Alla luce di quanto sopra, sembra che sulle rotte di cui ai punti (217) e (218) precedenti, Saremar operi in concorrenza con altri operatori. In effetti, come accennato in precedenza, le autorità italiane hanno riconosciuto il fatto che sulla rotta La Maddalena-Palau la concorrenza non è un fenomeno recente (v. punto (84)).

4.1.1.1.3.2. Il collegamento internazionale tra S. Teresa di Gallura (Sardegna) e Bonifacio (Corsica)

- (220) Secondo l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento n. 4055/86⁽²⁸⁾, "La libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi è applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi".

- (221) La Commissione ritiene che, a prescindere dalla mancanza di un'esplicita disposizione che disciplini la possibilità da parte degli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico per quanto riguarda i servizi di trasporto marittimo tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi, il regolamento n. 4055/86 non impedisca agli Stati membri di adottare tali azioni. In effetti, conformemente al paragrafo 9, secondo comma degli Orientamenti

⁽²⁸⁾ Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1.

in materia di trasporti marittimi⁽²⁹⁾ "La Commissione accetta inoltre che, qualora un servizio di trasporto internazionale sia necessario per far fronte ad un'impellente necessità di trasporto pubblico, possano essere imposti obblighi di servizio pubblico o conclusi contratti di servizio pubblico, a condizione che ogni compensazione sia conforme alle summenzionate norme sostanziali e procedurali del trattato [norme sostanziali e procedurali dettate dal trattato in materia di aiuti di Stato, nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia]".

- (222) Saremar gestisce solo una linea internazionale ai sensi del regime OSP, essendo il solo operatore stabilmente presente su questa linea durante tutto l'anno (due viaggi andata e ritorno al giorno). Le informazioni fornite dalle autorità italiane indicano che si tratta di un collegamento transfrontaliero a breve distanza (10 miglia nautiche) di interesse prevalentemente locale, sia per le comunità sarde che per le vicine comunità corse. Il collegamento di linea tra Santa Teresa e Bonifacio garantisce la mobilità dei lavoratori transfrontalieri e un flusso regolare di merci tra il sud della Corsica e la Sardegna settentrionale.
- (223) Come indicato sopra, Saremar gestisce questa rotta in concorrenza con un operatore privato solo durante l'alta stagione (aprile - settembre).

4.1.1.3.3. Conclusione

- (224) Dato che le autorità italiane non hanno fornito alla Commissione una chiara definizione della finalità e della natura degli obblighi di servizio pubblico imposti a Saremar sulle citate rotte rispetto ai servizi forniti dai suoi concorrenti, la Commissione non dispone in questa fase di informazioni sufficienti per valutare se esiste una reale esigenza di servizio pubblico sulle rotte operate da Saremar.

4.1.1.4. Tirrenia e Siremar

Tirrenia

- (225) Secondo le autorità italiane, nessun concorrente fornisce servizi analoghi in termini di continuità e frequenza, a quelli erogati da Tirrenia sulle rotte Genova - Porto Torres e Napoli-Palermo.
- (226) Tirrenia è il solo operatore a gestire tutto l'anno in modo continuativo la linea Genova - Olbia - Arbatax. I servizi forniti dalla concorrenza non sono costanti durante la bassa stagione e non includono un collegamento per Arbatax. Analogamente, nessun concorrente gestisce la rotta Civitavecchia-Olbia in bassa stagione.
- (227) Tirrenia è l'unico operatore presente sulle rotte Civitavecchia - Arbatax - Cagliari, Napoli - Cagliari, Palermo - Cagliari, Trapani - Cagliari e Termoli - Isole Tremiti.
- (228) La Commissione ritiene che i servizi offerti su rotte marittime possono configurare un autentico servizio di interesse economico generale solo nella misura in cui altri

operatori non offrono servizi analoghi a condizioni normalmente commerciali. Poiché non ha, in questo momento, un quadro completo degli effettivi obblighi imposti a Tirrenia per i collegamenti effettuati sulle citate rotte, la Commissione non può giungere ad una conclusione circa la legittimità della qualifica SIEG in riferimento alle citate rotte.

- (229) Per quanto riguarda i collegamenti mercantili operate da Tirrenia, le autorità italiane sostengono che nessun altro operatore di trasporti sia presente sulle rotte Napoli - Cagliari e Ravenna - Catania. Non viene fornito alcun servizio analogo in termini di frequenza e continuità sulla linea Livorno/Genova - Cagliari.
- (230) Nonostante ciò, la Commissione osserva che Tirrenia fornisce esclusivamente servizi di trasporto di merci sulle rotte in questione.
- (231) La Corte ha stabilito che, quando gli Stati membri fanno affidamento sull'esistenza di una missione SIEG e sulla necessità di tutela, essi devono assicurare che questa missione soddisfi taluni criteri minimi e dimostrare l'effettiva conformità a quei criteri in un caso particolare. Nel senso precisato dalla giurisprudenza, questi sono, in particolare, la presenza di un atto dell'autorità pubblica che delega agli operatori in questione una missione SIEG e il carattere universale e obbligatorio di tale missione.
- (232) Per quanto riguarda il carattere universale di tali servizi, la Corte ha già stabilito⁽³⁰⁾ che per poter essere definito servizio di interesse economico generale, il servizio in questione non deve necessariamente essere un servizio di carattere universale stricto sensu. In effetti, il concetto di servizio universale non significa che il servizio in questione debba rispondere a una necessità comune all'intera popolazione o essere erogato in un intero territorio⁽³¹⁾ quanto piuttosto che serva gli interessi della società nel suo complesso.
- (233) Inoltre, la Commissione ritiene che la legislazione comunitaria non impedisca agli Stati membri di qualificarsi validamente, a loro discrezione, come SIEG per alcuni servizi di trasporto marittimo da e verso aree remote, a condizione che vengano rispettati i principi stabiliti dal regolamento sul cabotaggio marittimo.
- (234) Tuttavia, stando alle informazioni disponibili a tutt'oggi, la Commissione non è certa che i collegamenti mercantili operati sulle rotte Napoli - Cagliari, Ravenna - Catania e Livorno/Genova - Cagliari possano essere considerati intesi a soddisfare interessi economici generali ai sensi della normativa UE. Parallelamente all'avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione invita le autorità italiane e i terzi a sottoporle le loro osservazioni al riguardo.

⁽²⁹⁾ Causa T289/03 BUPA e altri contro Commissione, Racc. 2008, pag II-0000, punto 186.

⁽³⁰⁾ Causa 66/86 Ahmed Saeed Flugreisen, Racc. 1989 803, punto 55; causa C-266/96 Corsica Ferries Francia, Racc. 1998, pag. I-3949, punto 45; causa T-17/02 Fred Olsen contro Commissione, Racc. 2005, pag. II-2031, punto 186.

⁽²⁹⁾ Cfr. nota 25.

Siremar

- (235) Secondo le autorità italiane, sulle rotte che rientrano nell'ambito della missione di servizio economico generale, i concorrenti di Siremar sono solo operatori che forniscono servizi marittimi analoghi in base al regime OSP. Tali operatori hanno anche diritto a ricevere una compensazione pubblica per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico.
- (236) In mancanza di una previa definizione del livello di servizi richiesto, la Commissione non può stabilire se esista una reale esigenza di servizio pubblico su queste rotte.

4.1.1.1.5. Conclusiones

- (237) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene in via preliminare che la definizione dell'obbligo di servizio pubblico non sia stata sufficientemente chiara e non consenta alla Commissione di concludere definitivamente se essa contenga errori manifesti.
- (238) La Commissione invita le autorità italiane a fornire tutte le informazioni necessarie per una valutazione completa della legittimità della qualifica SIEG (segnatamente i documenti che descrivono la portata degli obblighi di servizio pubblico imposti sui beneficiari degli aiuti fin dal 2009, in modo da chiarire il livello di servizi richiesto e tutte le informazioni sui servizi forniti dagli operatori in concorrenza con i beneficiari dell'aiuto che consentano di valutare se tali servizi soddisfano già le esigenze di servizio pubblico individuate dalle autorità italiane), incluso sotto il profilo dei servizi forniti nell'ambito del regime OSP da Tirrenia e Siremar, e di giustificare ulteriormente questa denuncia. La Commissione invita altresì le autorità italiane a precisare se i collegamenti su qualsiasi delle rotte internazionali operate dalle imprese dell'ex Gruppo Tirrenia (ad esempio quelli precedentemente operati da Adriatica tra Italia e Albania, Grecia e Croazia) sono stati interrotti e quando, e, in caso contrario, se una compensazione per obblighi di servizio pubblico sia stata versata dal 2009 per i servizi forniti su tali rotte.

4.1.1.2. Altmark 2

- (239) Per quanto riguarda la seconda condizione della sentenza Altmark, la Commissione osserva che i parametri in base ai quali è calcolata la compensazione sono stati stabiliti precedentemente in maniera obiettiva e trasparente.
- (240) Più specificatamente, le convenzioni iniziali contenevano, oltre alla metodologia del calcolo del rendimento per l'operatore, un elenco esaurente e preciso degli elementi di spesa da tenere in considerazione. Per quanto riguarda la compensazione per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nel 2010 e oltre, la Commissione osserva che il livello è stato stabilito sulla base della diret-

tiva CIPE menzionata al precedente punto (114), già pubblicata nel 2008. Il metodo di calcolo della compensazione, ad esempio gli elementi di spesa tenuti in considerazione e il rendimento del capitale investito, sono spiegati dettagliatamente in tale sede.

- (241) La Commissione ritiene quindi in via preliminare, che la seconda condizione della sentenza Altmark sia stata soddisfatta.

4.1.1.3. Altmark 3

- (242) In base alla terza condizione Altmark, la compensazione ricevuta per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico non può andare al di là di quanto necessario per coprire in tutto o in parte le spese sostenute nell'adempimento di tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di utile per l'adempimento degli obblighi.
- (243) Tuttavia, la sentenza Altmark non fornisce una definizione precisa di utile ragionevole. Gli orientamenti marittimi⁽³²⁾ prevedono che la quantità di sovvenzione concessa come compensazione per gli obblighi di servizio pubblico debba tenere conto di un rendimento ragionevole del capitale impiegato.
- (244) In questa fase, la Commissione nutre dubbi riguardo alla proporzionalità della compensazione corrisposta ai beneficiari a partire dal 2009, sulla base di diverse considerazioni esaminate dettagliatamente di seguito.
- (245) Un principio fondamentale della valutazione della proporzionalità della compensazione è che solo i costi netti sostenuti dall'operatore pubblico per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico possono dar luogo alla compensazione. Come indicato sopra, in questa fase la Commissione nutre dubbi sul fatto che la definizione di servizio pubblico corrisponda sempre ad un bisogno reale che non possa essere soddisfatto dalle sole forze di mercato e sulla portata precisa degli obblighi di servizio pubblico che incombono ai beneficiari dell'aiuto. In mancanza di una chiara definizione degli obblighi imposti ai beneficiari, la Commissione non può stabilire in modo inequivocabile i costi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione per calcolare la compensazione.

- (246) Per quanto riguarda la ragionevolezza dei margini di profitto, la Commissione considera che per profitto ragionevole si debba intendere un tasso di rendimento del capitale investito che tenga conto del rischio, o dell'assenza di rischio, che l'impresa affronta in virtù all'intervento dello Stato membro, in particolare se quest'ultimo conferisce diritti esclusivi o speciali. Il rendimento dovrebbe pertanto rispecchiare il livello di rischio cui sono esposti i beneficiari durante la fornitura del servizio pubblico in questione.

⁽³²⁾ Cfr. la nota n. 25.

(247) Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi del servizio pubblico a partire dal 2010, la Commissione osserva che il premio di rischio è stato fissato al 4%. La metodologia consente inoltre di sommare 2,5 punti percentuali al premio di rischio, per compensare i rischi più elevati cui sono esposti gli operatori che non beneficiano di diritti esclusivi. Il premio di rischio ammonta pertanto al 6,5%. In questa fase la Commissione nutre dubbi sul fatto che questo livello rispecchi un livello adeguato di rischio, tenendo conto che, da una prima analisi, non risulta che gli operatori assumano rischi che sono normalmente a carico di chi gestisce tali servizi. Più specificatamente, gli elementi di costo presi in considerazione ai fini del calcolo della compensazione includono tutti i costi che rientrano nella fornitura del servizio. Inoltre, si è tenuto conto delle variazioni del prezzo del carburante e dei costi delle operazioni portuali. Pertanto, il profilo di rischio potrebbe non giustificare il livello di compensazione corrisposto alle imprese.

(248) Di conseguenza, in questa fase la Commissione nutre dubbi sulla proporzionalità della compensazione dei servizi forniti e ritiene in via preliminare che, a partire dal 2010, gli operatori siano stati sovraccompensati per l'esecuzione dei compiti di servizio pubblico.

4.1.1.4. Altmark 4

(249) Il quarto criterio prevede che, per non costituire un aiuto, la compensazione debba essere fissata al livello minimo necessario. Tale criterio è ritenuto soddisfatto se i destinatari della compensazione sono stati scelti in base a una gara che consente la selezione di un offerente capace di fornire i servizi al costo minore oppure, ove ciò non fosse possibile, la compensazione è stata calcolata sulla base dei costi di un'impresa gestita in modo efficiente.

(250) In questo caso i beneficiari non sono stati scelti in base a una procedura di gara pubblica aperta. Lo Stato italiano ha semplicemente prorogato il sistema già in vigore, autorizzando in tal modo gli operatori già presenti a continuare a ricevere una compensazione per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

(251) Inoltre, le autorità italiane non hanno fornito alla Commissione alcuna indicazione sul fatto che il livello di compensazione sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in maniera ottimale e fornita adeguatamente di mezzi di trasporto in modo da essere in grado di soddisfare i necessari requisiti del servizio pubblico, avrebbe dovuto sostenere per l'adempimento di tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un profitto ragionevole per l'adempimento degli obblighi.

(252) Di conseguenza, in questa fase la Commissione non dispone di alcun elemento che permetta di sostenere che i beneficiari forniscano in effetti i servizi in questione al minor costo per la collettività. In assenza di elementi di prova a sostegno del contrario, non si può dimostrare

che la compensazione corrisposta nella fattispecie alle imprese per la fornitura dei SIEG sia stata determinata sulla base dei costi di un'impresa gestita in modo efficiente. La Commissione ritiene in via preliminare che nel caso in oggetto il quarto criterio Altmark non risulti soddisfatto.

4.1.1.5. Conclusioni

(253) La Commissione ritiene in via preliminare che le quattro condizioni enunciate dalla Corte nella sentenza Altmark non siano cumulativamente soddisfatte nel caso in oggetto. Di conseguenza, in base alle informazioni disponibili in questa fase, la Commissione ritiene che la misura conferisca un vantaggio economico a tutte le società dell'ex Gruppo Tirrenia.

(254) *Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi:* quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa a scapito di altre imprese concorrenti che operano sul mercato dell'Unione, queste ultime sono da considerarsi influenzate dall'aiuto⁽³³⁾. Per giungere a tale conclusione, è sufficiente che il beneficiario sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza⁽³⁴⁾. Nel caso in oggetto, i beneficiari operano in concorrenza con altre imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo nell'UE, in particolare da quando sono entrati in vigore il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio⁽³⁵⁾ e il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio⁽³⁶⁾, che hanno liberalizzato rispettivamente il mercato del trasporto marittimo internazionale e quello del cabotaggio marittimo. Pertanto, la misura in esame è tale da incidere sul commercio dell'UE e da falsare la concorrenza nel mercato interno.

(255) *Conclusione:* sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene in via preliminare che le compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico corrisposte alle società dell'ex Gruppo Tirrenia durante il periodo 2009 - 2011 costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(256) L'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento sul cabotaggio marittimo stabilisce che "i contratti di servizio pubblico esistenti rimangono in vigore fino alle rispettive date di scadenza". Pertanto, soltanto la compensazione corrisposta per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, relativamente alle rotte di cabotaggio previsti dai contratti pubblici in vigore al momento della liberalizzazione del mercato del cabotaggio, e strettamente proporzionale alle spese sostenute può essere considerata un aiuto di Stato esistente ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

⁽³³⁾ Cfr. in particolare la causa 730/79 Philip Morris contro Commissione, Racc. 1980 pag. 2671, punto 11; causa C-53/00 Ferring, Racc. 2001 pag. I-9067, punto 21 e causa C-372/97 Italia contro Commissione, pag. I-3679, punto 44.

⁽³⁴⁾ Causa T-214/95 Het Vlaamse Gewest contro Commissione, Racc. 1998, pag. II-717.

⁽³⁵⁾ Cfr. la nota n. 28.

⁽³⁶⁾ Cfr. la nota n. 21.

(257) Le convenzioni iniziali scadute alla fine del 2008 sono state ulteriormente prorogate dalle autorità italiane senza indire alcuna gara. Pertanto, nella misura in cui la compensazione pagata sulla base di questa proroga costituisce un aiuto di Stato, tale aiuto dovrebbe essere considerato un aiuto nuovo. Questa valutazione è conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 794/2004⁽³⁷⁾ in base al quale il mero prolungamento nel tempo di un regime di aiuto crea un nuovo aiuto. Il Tribunale ha confermato che la modifica della durata di un regime di aiuto dovrebbe essere considerata un nuovo aiuto⁽³⁸⁾.

4.1.2. La privatizzazione (misura 2)

(258) È considerato aiuto di Stato qualsiasi vantaggio diretto o indiretto, finanziato con risorse pubbliche e concesso direttamente dallo Stato o da organismi intermedi che agiscano nell'esercizio di competenze conferite loro dallo Stato⁽³⁹⁾.

(259) *Imputabilità allo Stato:* In questo caso la liquidazione degli attivi è stata condotta nel contesto di una procedura d'insolvenza. Sebbene dopo l'ammissione alla procedura specifica, la gestione della società insolvente sia trasferita al commissario straordinario, quest'ultimo è nominato dal ministro competente e opera sotto la supervisione del consiglio di sorveglianza (composto dagli esperti nominati dal Ministero).

(260) In aggiunta, il progetto del piano di cessione degli attivi, o in alternativa, il progetto del piano di ristrutturazione, viene redatto sotto la supervisione del Ministero e in conformità con i suoi orientamenti politici complessivi ed è sottoposto all'autorizzazione formale da parte di quest'ultimo. Inoltre, qualora venga effettuata la vendita dei beni, la scelta dell'acquirente dei beni della società viene effettuata dal commissario straordinario in base ai criteri definiti chiaramente dalla legge stessa.

(261) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la supervisione che le autorità pubbliche esercitano sulla vendita dei beni conformemente alla legge Marzano, successivamente modificata dal D.L. 134/2008, è tale da implicare l'imputabilità allo Stato delle decisioni adottate dal commissario straordinario.

(262) *Risorse statali e vantaggio economico selettivo:* vendendo beni propri a prezzi inferiori ai prezzi di mercato, lo Stato rinuncia a risorse statali e allo stesso tempo accorda un vantaggio all'acquirente dei beni o all'impresa privatizzata, un vantaggio che quest'ultima non avrebbe ottenuto alle normali condizioni del mercato. Tale vantaggio risulta poi necessariamente selettivo, in quanto viene ac-

cordato soltanto all'acquirente dei beni o all'attività economica in questione. Se una società viene privatizzata non tramite una vendita delle quote azionarie in borsa bensì tramite una vendita commerciale (mediante una vendita totale o parziale della società ad altre società), la Commissione ritiene che sia sufficiente tener conto dei seguenti principi per concludere se è stato ottenuto un prezzo equo di mercato e pertanto se non è presente alcun elemento di aiuto di Stato:

(a) occorre indire una gara d'appalto aperta a tutte le parti interessate, trasparente e non condizionata dall'esecuzione di altri atti come l'acquisizione di beni patrimoniali diversi da quelli del bando per la prosecuzione di determinate attività;

(b) la società deve essere venduta al miglior offerente;

(c) gli offerenti devono disporre di tempo e informazioni sufficienti per compiere una valutazione adeguata degli attivi per i quali presentano l'offerta⁽⁴⁰⁾.

(263) Sulla base delle informazioni disponibili in questa fase, la Commissione ritiene che la procedura di vendita non possa essere considerata sufficientemente trasparente, incondizionata e non discriminatoria da permettere di escludere in sé la presenza di aiuti di Stato.

(264) Innanzitutto, la Commissione osserva che le norme speciali introdotte con D.L. n. 134/2008 applicabili ai servizi pubblici essenziali, come definiti dalle autorità italiane,⁽⁴¹⁾ e applicabili al caso in oggetto, hanno ridotto in misura significativa i requisiti di trasparenza previsti dal regime generale, in particolare consentendo trattative private tra il commissario straordinario e i potenziali acquirenti.

(265) Sebbene l'invito a manifestare interesse per gli attivi di Tirrenia e di Siremar sia stato pubblicato in diversi quotidiani, esso non illustrava nel dettaglio gli attivi oggetto dell'accordo di vendita e non forniva agli offerenti istruzioni chiare sulle fasi successive della procedura. L'invito non conteneva alcun criterio di preselezione o selezione né alcuna altra condizione che dovesse essere soddisfatta dagli offerenti oltre alla condizione obbligatoria di continuare a fornire il servizio pubblico alle condizioni imposte dagli atti di conferimento dell'incarico. Tutte le informazioni rilevanti riguardo agli attivi oggetto della procedura di vendita sono state messe a disposizione degli offerenti solo durante la fase di *due diligence*. Secondo le autorità italiane, i documenti presenti nella *data room* comprendevano i progetti di convenzione che avrebbero dovuto sottoscrivere i vincitori della gara.

⁽³⁷⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 140 del 30.4.2004.

⁽³⁸⁾ Cause congiunte T-127/99, T-129/99 e T-148/99 Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava e altri/Commissione, Racc. 2002, pag. II-1275, punto 175.

⁽³⁹⁾ Causa C-482/99, Francia contro Commissione, Racc. 2002, pag. I-4397.

⁽⁴⁰⁾ XXIII relazione sulla politica in materia di concorrenza 1993, punto 402 e successivi.

⁽⁴¹⁾ In base all'articolo 1 della legge del 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici essenziali sono tutti quei servizi che mirano a concedere e a tutelare l'esercizio del diritto fondamentale individuale della persona riconosciuto dalla Costituzione italiana, quale il diritto alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza, alla libertà di circolazione, alle pensioni sociali, all'istruzione e alla libertà di comunicazione.

- (266) Come illustrato in precedenza, le autorità italiane sostengono che l'oggetto della vendita includeva solo gli attivi e i contratti necessari per fornire il servizio pubblico conformemente alle nuove convenzioni, mentre gli attivi non essenziali sarebbero stati scissi. Tuttavia, per quanto riguarda Tirrenia, l'invito a manifestare interesse pubblicato il 15 settembre 2010 prevede quanto segue:

"[...] in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, co. 4, del d.l. n. 347 del 2003, Tirrenia di Navigazione S.p.A. in a.s. intende procedere alla dismissione del complesso aziendale preposto all'erogazione del servizio di collegamento di cui al regime convenzionale, nonché al servizio erogato su altre tratte direttamente operate dalla Tirrenia di Navigazione, al di fuori del predetto rapporto convenzionale. [...] Separatamente si disporrà sia per i cespiti non direttamente riconducibili al ramo di azienda di Tirrenia di Navigazione S.p.A. preposto all'erogazione del servizio di collegamento di cui anche al regime convenzionale, sia per la partecipazione azionaria in Siremar S.p.a. (ovvero in ogni caso per il complesso aziendale che si riferisce alle concessioni esercitate da quest'ultima Società)."

- (267) La Commissione osserva che la formulazione dell'invito a manifestare interesse per l'acquisto di Tirrenia sembrerebbe suggerire che l'intenzione del commissario straordinario fosse di abbinare le attività necessarie all'adempimento degli obblighi di servizio pubblico e le attività non essenziali a tal fine. Con l'avvio di una procedura formale d'indagine, la Commissione invita le autorità italiane a fornire informazioni chiarificatorie in tal senso ed a precisare le rotte gestite da Tirrenia al di fuori del regime previsto dalle convenzioni, nonché le attività impiegate a tale scopo. In effetti, l'abbinamento di beni privi di destinazione economica comune può comportare la riduzione del valore di mercato dei beni, rispetto alla vendita scorporata degli stessi beni.

- (268) Per quanto riguarda Siremar, l'invito a manifestare interesse prevede quanto segue:

"[...] in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, co. 4, del d.l. n. 347 del 2003, Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.A. in a.s. intende procedere alla dismissione del complesso aziendale preposto all'erogazione del servizio di collegamento di cui al regime convenzionale".

- (269) Inoltre, la Commissione osserva che i criteri di aggiudicazione previsti dal D.L. n. 134/2008 non sono necessariamente tali da consentire di ottenere il prezzo migliore per i beni oggetto della vendita e che la procedura non è più destinata a ottimizzare i ricavi della vendita degli attivi. Il D.L. n. 134/2008 si discosta esplicitamente dalle disposizioni dell'articolo 62 del D.L. n. 270/1999, in base al quale la procedura che disciplina l'alienazione dei beni delle imprese insolventi deve essere finalizzata al miglior realizzo. Tuttavia, esso afferma che il prezzo di cessione

non può essere inferiore a quello di mercato, risultante da perizia effettuata da un esperto indipendente nominato con decreto ministeriale.

- (270) Inoltre, se una privatizzazione è subordinata a determinate condizioni, anche se una società è stata venduta al miglior offerente per un prezzo superiore al valore stimato comprensivo di dette condizioni, si potrebbe configurare la presenza di aiuto di Stato se il prezzo pagato dall'investitore privato è minore di quello che sarebbe stato ottenuto in assenza di tali condizioni⁽⁴²⁾. Ciò è dovuto al fatto che tali condizioni non sarebbero state imposte da un investitore privato. Nella misura in cui il rendimento ottenuto è inferiore al prezzo che sarebbe stato raggiunto senza tali condizioni, la Commissione solitamente ritiene che la differenza possa conferire un vantaggio all'attività economica trasferita. In aggiunta, tali condizioni possono costituire uno svantaggio per alcuni investitori nella fase iniziale della procedura e disincentivarli dal presentare un'offerta, in modo tale che l'effetto competitivo della gara ne risulti compromesso, nel qual caso potrebbe configurarsi un elemento di aiuto a favore dell'acquirente⁽⁴³⁾.

- (271) Nel caso in oggetto la Commissione osserva che ai potenziali acquirenti sono state imposte alcune condizioni riguardanti il livello della forza lavoro. Questo fatto non è contestato dalle autorità italiane. La Commissione osserva inoltre che gli inviti a manifestare interesse prevedevano esplicitamente come condizione obbligatoria la continuità del servizio pubblico per tutta la durata delle nuove convenzioni.

- (272) Ad una prima analisi, la Commissione ritiene che già nelle fasi iniziali della procedura i possibili investitori che avrebbero potuto prendere in considerazione un diverso utilizzo dei beni in questione avrebbero potuto essere disincentivati dal presentare un'offerta. Si può supporre che, imponendo l'obbligo di fornire un servizio pubblico, lo Stato non abbia cercato di ottenere il prezzo maggiore, quanto piuttosto di perseguire un obiettivo pubblico basato su considerazioni di sviluppo sociale e regionale. La Commissione dubita che un venditore privato avrebbe attribuito lo stesso peso al funzionamento ininterrotto del servizio pubblico. In questa fase, la Commissione non può escludere che un venditore privato avrebbe cercato di vendere i beni separatamente e non avrebbe avuto interesse a definire alcuna linea strategica relativamente alle attività future fornite tramite tali beni.

- (273) Pertanto, la Commissione ritiene in via preliminare che questa condizione possa ostacolare il libero gioco della concorrenza nel contesto dell'operazione di vendita, dato che di per sé stessa potrebbe impedire che un offerente, pur offrendo il prezzo maggiore, sia dichiarato vincitore a meno che non attui una strategia commerciale interamente conforme agli obiettivi pubblici dichiarati.

⁽⁴²⁾ Decisione della Commissione sull'aiuto di Stato n. C 56/2006 (ex NN 77/06) – Austria - privatizzazione della HYPO Bank Burgenland AG, punto 114.

⁽⁴³⁾ Decisione della Commissione del 27.2.2008 sull'aiuto di Stato n. C 46/07 (ex NN59/07).

(274) La Commissione ritiene che in linea di principio l'obbligo di mantenere i livelli di occupazione non sarebbe stato imposto da parte di un venditore privato alle condizioni normali di mercato, in quanto avrebbe rischiato di non ottenere il prezzo maggiore per gli attivi che vende.

Commissione ritiene che, non essendo tale priorità remunerata, la misura conferisce un vantaggio a livello di regolamentazione che non implica alcun trasferimento di risorse statali e che la misura non possa di conseguenza essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(275) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene in questa fase che la procedura di privatizzazione di Tirrenia non sia stata sufficientemente trasparente e incondizionata da garantire di per sé stessa che la vendita avvenisse a prezzi di mercato. Sulla base delle informazioni disponibili, non si può escludere che le offerte sarebbero state più alte o che altri offerenti avrebbero partecipato alla gara se i criteri di selezione fossero stati più trasparenti e la gara d'appalto fosse stata incondizionata. Avviando la procedura d'indagine formale, la Commissione invita le autorità italiane e le parti interessate a fornire tutte le informazioni utili alla valutazione della conformità del prezzo di vendita al valore di mercato dei beni trasferiti all'acquirente. Risulta effettivamente essenziale valutare caso per caso se tali condizioni abbiano comportato la riduzione del valore di mercato, conferendo un vantaggio economico all'attività economica ceduta o all'acquirente.

(276) Inoltre, in questa fase la Commissione non dispone di elementi sufficienti che le permettano di valutare se la vendita del complesso aziendale preposto all'erogazione del servizio pubblico in base al regime previsto dalle convenzioni, alle condizioni indicate sopra, implichi una continuità economica tra Tirrenia e i suoi acquirenti. In base alla giurisprudenza consolidata, per valutare se l'obbligo di restituzione degli aiuti concessi ad un'impresa in difficoltà possa essere esteso all'impresa cui siano stati trasferiti i beni dell'impresa beneficiaria e valutare quindi la misura in cui tale trasferimento comporti la continuità delle attività, si può tenere conto dei seguenti fattori: l'oggetto del trasferimento (attivi e passivi, continuità della forza lavoro, attivi *bundled*), il prezzo del trasferimento, l'identità degli azionisti o dei proprietari dell'impresa acquirente e di quella originaria, il momento in cui il trasferimento è realizzato (dopo l'inizio delle indagini, dell'avvio del procedimento o della decisione finale) o infine la logica economica dell'operazione⁽⁴⁴⁾. Il fatto che la Commissione concluda che vi sia continuità economica può significare che gli eventuali aiuti incompatibili concessi alle società dell'ex Gruppo Tirrenia possano essere recuperati presso le entità che ne hanno continuato l'attività economica.

(277) La stessa argomentazione vale per la privatizzazione di Siremar, per la quale è stata seguita la medesima procedura.

4.1.3. Priorità di attracco (misura 3)

(278) Per quanto riguarda la priorità di attracco, prevista al comma 21 dell'articolo 19ter della legge del 2009, la

(279) Se la priorità di attracco è remunerata, la Commissione ritiene che, nella misura in cui la Commissione accetta la definizione di servizio pubblico proposta dalle autorità italiane, qualsiasi diritto a posti di attracco e qualsiasi priorità a questo riguardo sono intrinseci alla missione pubblica, tanto da essere concessi solamente in relazione a rotte gestite in regime di servizio pubblico. In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane la priorità di attracco non è apparentemente prevista per le linee servite dalle società che non operano in regime di servizio pubblico. Sulla base di tali informazioni, la Commissione ritiene di conseguenza che tale diritto non comporti un vantaggio economico aggiuntivo per le società.

(280) In ogni caso, con l'avvio di una procedura formale d'indagine, la Commissione invita le autorità italiane e i terzi a fornire informazioni in merito al fatto che il vantaggio comporti la perdita di risorse statali e, in caso affermativo, sugli eventuali servizi non pertinenti il regime di servizio pubblico forniti da Tirrenia e Siremar e a chiarire ulteriormente se la priorità di attracco sia limitata alle rotte incluse nel regime di servizio pubblico con riferimento a tutte le società dell'ex Gruppo Tirrenia.

(281) Per quanto riguarda il presunto abuso di posizione dominante di cui al punto (159), la Commissione osserva che le tariffe applicate da Caremar sono state imposte dalle autorità pubbliche e costituiscono una caratteristica intrinseca alla missione pubblica, secondo la definizione delle autorità italiane, nella misura in cui tale definizione non includa errore manifesto.

4.1.4. Misure previste dalla legge del 2010 che converte il decreto legge n. 125/2010 (misura 4)

(282) Il decreto legge n. 125/2010, convertito con modifiche nella legge 2010, ha previsto varie misure di sostegno a favore delle società facenti parte dell'ex Gruppo Tirrenia e precisamente:

(a) la possibilità di usare a titolo temporaneo le somme di 49 milioni di euro e di 7 milioni di euro, rispettivamente, parzialmente destinate all'ammodernamento della flotta, per coprire le spese correnti;

(b) determinati vantaggi fiscali nell'ambito del processo di privatizzazione e

(c) la possibilità per le società del Gruppo Tirrenia di avvalersi di risorse FAS per soddisfare le attuali esigenze di liquidità.

⁽⁴⁴⁾ Cause riunite C-328/99 e C-399/00 Italia e SIM 2 Multimedia contro Commissione, Racc. 2003, pag. I-4035.

(283) *Risorse statali:* dato che tutte le misure sopra citate implicano un finanziamento statale aggiuntivo concesso alle società dell'ex Gruppo Tirrenia da parte dello Stato italiano, tali misure implicano senza dubbio l'uso di risorse statali. Analogamente, la decisione delle autorità italiane di concedere a determinate imprese finanziamenti a titolo dei fondi FAS costituisce un trasferimento di risorse statali.

(284) *Vantaggio economico selettivo:* il finanziamento pubblico è destinato a determinate imprese ed è di conseguenza selettivo. La Commissione rileva che, ai fini di stabilire se la misura conferisce un vantaggio economico ai beneficiari, il fatto che il finanziamento pubblico aggiuntivo sopra citato miri a coprire le esigenze di liquidità delle società appartenenti all'ex Gruppo Tirrenia, oppure a sostenere investimenti per l'ammodernamento della flotta, è di per sé irrilevante.

(285) La Commissione osserva che, secondo le autorità italiane, il finanziamento di 7 milioni di euro era stato fornito al fine di assicurare la conformità rispetto a determinati adeguamenti tecnici obbligatori per le navi destinate a servizio pubblico e/o effettivamente poste in vendita nell'ambito della procedura di privatizzazione. Nella misura in cui gli adeguamenti tecnici sono stati richiesti per potere erogare il servizio pubblico, essi costituiscono un costo collegato al servizio pubblico e possono essere compensati di conseguenza. Alternativamente, il finanziamento degli adeguamenti tecnici necessari per porre le navi in vendita nel quadro del processo di privatizzazione rappresenta un costo normale che qualsiasi venditore privato sosterrebbe. Un finanziamento di questo tipo conferisce un vantaggio economico alle imprese vendute. Lo stesso criterio è valido per il finanziamento di 49 milioni di euro.

(286) I costi relativi all'ammodernamento della flotta sembreranno sostenuti nell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico. La Commissione ritiene tuttavia che in base alle conclusioni di cui al punto (253), la compensazione concessa per coprire tali costi costituisca un vantaggio economico per i beneficiari, in quanto le autorità italiane non hanno in alcun modo dimostrato che le quattro condizioni enunciate nella sentenza Altmark risultano soddisfatte. Si invitano pertanto le autorità italiane a specificare quali adeguamenti tecnici si sono resi necessari per erogare il servizio pubblico e quali si sono resi necessari per porre effettivamente in vendita le navi, nel quadro del processo di privatizzazione.

(287) La Commissione ritiene che tutte le misure sopra citate, compresi i vantaggi fiscali nell'ambito del processo di privatizzazione e l'uso delle risorse FAS per coprire le spese correnti, consentano ai beneficiari di evitare costi che avrebbero normalmente dovuto sostenere attingendo alle proprie risorse finanziarie e impediscano quindi il

normale gioco delle forze di mercato⁽⁴⁵⁾. Di conseguenza i beneficiari sono in grado di migliorare la propria situazione finanziaria complessiva.

(288) *Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi:* le considerazioni esposte al punto (254) riguardano tutte le misure oggetto di esame.

(289) *Conclusione:* la Commissione ritiene in via preliminare che tutte le misure sopra elencate e stabilite dal D.L. 125/2010, convertito con modifiche nella legge del 2010, costituiscono un aiuto a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia.

4.1.5. Conclusione

(290) In base alle argomentazioni riportate sopra, la Commissione ritiene in questa fase che tanto le compensazioni corrisposte alle imprese facenti parte dell'ex Gruppo Tirrenia per la gestione dei servizi marittimi (*misura 1*), quanto le misure previste dalla legge del 2010 (*misura 4*) costituiscono aiuti di Stato a favore delle società del Gruppo Tirrenia ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(291) Inoltre, in questa fase la Commissione ritiene in via preliminare che la vendita di beni eseguita in conformità con le disposizioni della legge Marzano, e successive modifiche (*misura 2*), potrebbe configurare un aiuto a favore degli acquirenti dei beni di Tirrenia e/o Siremar e/o della attività economica oggetto della privatizzazione nonché comportare l'obbligo, per gli acquirenti, del rimborso delle misure di aiuto incompatibili concesse in precedenza a Tirrenia e/o Siremar nella misura in cui vi sia continuità economica con gli acquirenti di Tirrenia e/o Siremar.

(292) La priorità di attracco (*misura 3*) di cui al paragrafo 21 dell'articolo 19ter della legge del 2009 non costituisce aiuto di Stato nella misura in cui non viene solitamente remunerata. Nella misura in cui la priorità di attracco comporta una perdita di risorse statali, essa costituisce aiuto di Stato. La Commissione invita le autorità italiane a fornire chiarimenti in proposito.

4.2. Legittimità dell'aiuto

(293) Poiché le disposizioni sono state attuate prima dell'approvazione formale da parte della Commissione, le autorità italiane non hanno adempiuto all'obbligo di sospensione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Lo stesso criterio è valido per le sovvenzioni erogate per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico a Tirrenia e Siremar, non formalmente notificate alla Commissione.

⁽⁴⁵⁾ Sentenza del 14 febbraio 1990, causa C-301/87 Francia contro Commissione, Racc. 1990 pag. I-307, punto 41.

- (294) La Commissione osserva, inoltre, che nessuna delle misure di cui al paragrafo (282) è stata notificata alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. In ogni caso, in base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, solamente Tirrenia ha usufruito di un finanziamento pubblico aggiuntivo dell'importo di 12 051 900 euro. In questa fase, la Commissione ritiene che tale finanziamento pubblico costituisca un aiuto illegale a Tirrenia.
- (295) La Commissione ricorda alle autorità italiane che qualsiasi misura di aiuto deve essere notificata in anticipo alla Commissione e non deve essere adottata prima dell'approvazione della Commissione. Di conseguenza qualsiasi sovvenzione o altra forma di vantaggio ulteriormente concessa nell'attuazione delle misure illustrate al punto (282) deve essere notificata formalmente alla Commissione prima dell'attuazione e non essere attuata prima della sua approvazione.
- (296) Inoltre, a seguito del completamento della procedura di vendita sopra descritta, anche qualsiasi aiuto incluso nella vendita dei beni costituisce un aiuto illegale.

4.3. Compatibilità dell'aiuto

4.3.1. La compensazione (misura 1)

4.3.1.1. Base giuridica

- (297) Nella misura in cui la Commissione accetta la qualifica dei servizi come SIEG, la valutazione di compatibilità deve essere eseguita ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.
- (298) L'articolo 106, paragrafo 2, dispone che "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione".
- (299) Tale articolo stabilisce una deroga rispetto alla proibizione dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE nella misura in cui tale aiuto sia necessario e proporzionale e la mancanza di tale aiuto impedisca l'erogazione dei servizi di interesse economico generale a condizioni economiche accettabili. Ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, del TFUE spetta alla Commissione assicurare l'applicazione di tale articolo, specificando tra l'altro le condizioni da soddisfare rispetto ai criteri di necessità e proporzionalità.

- (300) In seguito alla sentenza Altmark, la Commissione ha specificato tali condizioni nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (in seguito, *disciplina quadro sui SIEG*)⁽⁴⁶⁾ e nella decisione della Commissione 2005/842/CE del 28 novembre 2005 riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE [at-

tualmente articolo 106, paragrafo 2, del TFUE] agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione a fronte di obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (in seguito, *decisione SIEG*)⁽⁴⁷⁾, che rappresentano pertanto la politica della Commissione rispetto all'applicazione delle deroghe all'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. In particolare, il punto 8 della disciplina quadro sui SIEG chiarisce che la Commissione considera l'aiuto proporzionato e necessario ai sensi dell'Articolo 106, paragrafo 2, del TFUE se risultano soddisfatte le condizioni stabilite dalla disciplina stessa.

- (301) L'aiuto ai trasporti marittimi rientra specificamente nel campo di applicazione della decisione SIEG, che ritiene compatibile con il mercato interno e esente dai requisiti di notifica la compensazione per servizio pubblico che soddisfi le condizioni stabilite nella stessa; di conseguenza, la compatibilità dell'aiuto in questione dovrebbe essere esaminata alla luce dei criteri contenuti nella decisione SIEG.

- (302) Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione stabilisce quanto segue:

"Nel settore dei trasporti aerei e marittimi, la presente decisione si applica soltanto agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico, concessi ad imprese relativamente ai servizi d'interesse economico generale di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che soddisfano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 e del regolamento (CEE) n. 3577/92, ove applicabili".

- (303) Il regolamento sul cabotaggio marittimo specifica che i contratti di servizio pubblico non aggiudicati in base a una gara di appalto rimangono in vigore fino alla relativa scadenza, in questo caso fino al 31 dicembre 2008. La legge in vigore ne ha di conseguenza imposto l'aggiudicazione mediante gara dal 1º gennaio 2009.

- (304) A parere della Commissione, con il mantenimento in vigore delle convenzioni iniziali oltre la relativa scadenza e quindi oltre la scadenza disposta dal regolamento sul cabotaggio marittimo, l'Italia non ha adempiuto agli obblighi imposti dall'articolo 4 di tale regolamento, in base al quale uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari. Pertanto, la Commissione dovrebbe valutare se l'infrazione in questione sia tale da incidere sulla compatibilità delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico in quanto necessaria per la realizzazione dell'oggetto o del funzionamento dell'aiuto, aggravando la distorsione prodotta dall'aiuto⁽⁴⁸⁾ o se essa sia un'infrazione di altre norme del diritto europeo, da affrontare

⁽⁴⁷⁾ GU C 312 del 29.11.2005.

⁽⁴⁸⁾ Causa 74/76 Iannelli & Volpi, Racc. 1997, pag. I-557, punto 14 e causa C-225/91, Matra contro Commissione, Racc. 1993, pag. I-3203, punto 41.

nel contesto giuridico e procedurale appropriato. La Commissione dubita che la proroga delle convenzioni iniziali fino alla fine del processo di privatizzazione possa essere considerata indispensabile per permettere il miglior realizzo rispetto al valore dei beni delle società del Gruppo Tirrenia nel contesto della vendita in oggetto.

(305) Ne consegue che in questa fase la Commissione ritiene che la compensazione per servizio pubblico oggetto della presente valutazione non rientri nel campo di applicazione della decisione SIEG.

(306) Inoltre, la disciplina quadro sui SIEG definisce i criteri di compatibilità delle misure soggette all'obbligo di notifica. Il punto 3 di detta disciplina esclude esplicitamente il settore dei trasporti e non è quindi applicabile al caso in questione. La Commissione può tuttavia tener conto nella propria valutazione dei principi di base definiti nella disciplina in relazione a casi specifici che non rientrano nel suo campo di applicazione, nella misura in cui riflettono la pratica della Commissione e la giurisprudenza dei tribunali dell'UE rispetto all'applicazione dell'articolo 106 del TFUE (49).

4.3.1.2. Valutazione

(307) Ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, i servizi sovvenzionati devono corrispondere a servizi di reale interesse economico generale, devono essere affidati in modo adeguato ai beneficiari e i riceventi non devono essere compensati in modo eccessivo per il loro adempimento.

(308) Di conseguenza è necessario valutare se:

- (a) i servizi di trasporto marittimo oggetto di valutazione costituiscano realmente servizi SIEG;
- (b) i beneficiari siano esplicitamente incaricati dallo Stato italiano per l'offerta di servizi chiaramente definiti;
- (c) il compenso sia proporzionato al costo netto della prestazione dei servizi pubblici.

4.3.1.2.1. SIEG reali

(309) In base alle valutazioni di cui ai punti da (183) a (238), la Commissione ritiene che la definizione di servizio pubblico non sia sufficientemente precisa e tale da consentire alla Commissione di stabilire se contenga un errore manifesto.

4.3.1.2.2. Incarico

(310) I beneficiari sono stati esplicitamente incaricati della prestazione dei servizi in questione. I parametri della compensazione devono essere definiti in anticipo, in modo obiettivo e trasparente. Gli obblighi di servizio pubblico non sono stati tuttavia definiti in modo preciso in questa

fase e in base alle informazioni disponibili la Commissione ritiene che i beneficiari non siano stati adeguatamente incaricati della missione pubblica.

(311) La legge del 2009 chiarisce che i fornitori di servizio pubblico corrispondono alle imprese appartenenti all'ex Gruppo Tirrenia. Come accennato in precedenza, la Commissione ritiene che l'atto di incarico non fornisca una descrizione esaustiva della natura degli obblighi di servizio pubblico. Il fatto che le stesse società abbiano fornito i servizi per un lungo periodo e che presumibilmente l'entità e la natura di tali servizi non abbiano subito alterazioni significative nel tempo non basta a far concludere che l'attuale incarico definisca precisamente tali obblighi di servizio pubblico.

(312) In effetti, come accennato ai punti (44) e (194), la Commissione è certamente consapevole del fatto che gli obblighi di servizio pubblico avrebbero dovuto essere definiti in modo dettagliato nei piani quinquennali. A questo proposito la Commissione ammette che elementi diversi dell'incarico possano essere inseriti in vari atti senza che per questo venga messa in discussione l'adeguatezza della definizione degli obblighi. Ciononostante, le autorità italiane hanno informato la Commissione che per il periodo 2005–2008 non è stato adottato un piano quinquennale. Pertanto, in questa fase, la Commissione non può valutare se la definizione degli obblighi di servizio pubblico è stata chiara e precisa.

4.3.1.2.3. Proporzionalità

(313) Poiché la Commissione non dispone di un quadro chiaro per quanto riguarda la definizione degli obblighi SIEG, non è nemmeno in grado di valutare i costi derivanti da tali obblighi e il relativo livello proporzionale di compensazione.

4.3.1.2.4. Compatibilità con gli orientamenti in materia di trasporti marittimi

(314) Inoltre, gli orientamenti marittimi stabiliscono che nell'ambito del cabotaggio marittimo gli Stati membri possono concludere contratti di servizio pubblico per i servizi di cui all'articolo 4 del regolamento sul cabotaggio marittimo, aggiungendo che tali contratti di servizio pubblico e le eventuali compensazioni corrisposte in base ad essi devono soddisfare le condizioni di cui a tale disposizione e le norme in materia di aiuti di Stato. La Commissione dovrebbe pertanto valutare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento sul cabotaggio marittimo relativamente alle compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico al fine di garantire la conformità con gli orientamenti in materia di trasporti marittimi.

(315) *Conclusione:* alla luce della precedente valutazione di compatibilità, la Commissione nutre in questa fase dubbi in merito alla compatibilità con il mercato interno dell'aiuto corrisposto sotto forma di compensazione di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. la decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato C 16/08, GU L 45 del 18.2.2011.

4.3.2. La privatizzazione (misura 2)

(316) Poiché le autorità italiane ritengono che la procedura di vendita non comporti aiuto, non sono stati forniti argomenti a supporto della relativa compatibilità.

(317) Nella fase attuale dell'indagine, la Commissione ritiene che ogni eventuale aiuto che possa essere stato concesso nel corso del processo di privatizzazione sia incompatibile in quanto non risulta ricadere nel campo di applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2) e paragrafo 3) del TFUE.

(318) Inoltre, come già indicato, l'articolo 4 del regolamento sul cabotaggio marittimo stabilisce che qualora uno Stato membro concluda contratti di servizio pubblico o imponga obblighi di servizio pubblico, esso lo faccia su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari. La Commissione osserva che l'organizzazione di una gara per l'acquisto dei beni dell'ex Gruppo Tirrenia in concomitanza coi nuovi contratti di servizio pubblico può essere interpretata nel senso che tali nuovi contratti di servizio pubblico sono stati assegnati su base non discriminatoria. In particolare, tutti gli operatori potenzialmente interessati sono trattati allo stesso modo e, per quanto riguarda sia Tirrenia che Siremar, non ci sono rischi di favorire le aziende esistenti in quanto la vendita avviene nel contesto di una procedura di liquidazione delle stesse. In ogni caso, qualora si verificasse un'infrazione, la Commissione dovrebbe valutare se tale eventuale infrazione incida sulla compatibilità degli eventuali aiuti che potrebbero risultare dalla privatizzazione di Tirrenia in quanto necessaria per la realizzazione dell'oggetto o del funzionamento dell'aiuto e aggravando la distorsione prodotta dall'aiuto.

4.3.3. Priorità di attracco (misura 3)

(319) Come indicato, la Commissione ritiene che il vantaggio conferito dalla misura sia inherente al carattere di missione pubblica dei servizi forniti dai beneficiari nella misura in cui esso si limiti ai servizi forniti in regime di servizio pubblico. Tuttavia, poiché in questa fase la Commissione nutre dubbi in merito alla legittimità della missione SIEG di alcuni servizi erogati dai beneficiari, sulla base delle informazioni disponibili, essa non può esprimere un parere conclusivo sulla compatibilità della misura con il mercato interno.

4.3.4. Misure disposte dalla legge del 2010 (misura 4)

(320) Dato che in questa fase la Commissione nutre dubbi sia in merito alla legittimità della missione pubblica che alla proporzionalità della compensazione dei costi sostenuti dalle società nell'espletamento dei servizi, essa non può ritenere che le misure di cui alla legge del 2010 (misura 4) siano necessarie per finanziare obblighi di servizio pubblico. L'insieme delle misure appare quindi verosimilmente un aiuto al funzionamento volto a ridurre i costi

che le società appartenenti all'ex Gruppo Tirrenia avrebbero dovuto sostenere basandosi sulle proprie risorse ed è quindi da considerarsi incompatibile con il mercato interno (⁵⁰).

4.3.5. Conclusioni sulla compatibilità

(321) In questa fase del procedimento la Commissione conclude che le misure in discussione a favore delle società appartenenti all'ex Gruppo Tirrenia appaiono incompatibili con il mercato interno.

(322) La Commissione ha conseguentemente deciso di avviare la procedura formale d'indagine di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione alle misure 1, 2, 3 e 4.

5. DECISIONE

(323) Alla luce delle precedenti considerazioni la Commissione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, invita la Repubblica Italiana a presentare le proprie osservazioni e a fornire ogni informazione che possa contribuire a valutare le misure descritte, entro un mese dal ricevimento della presente lettera. Essa richiede inoltre alle autorità italiane di inoltrare immediatamente copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto.

(324) La Commissione richiede in particolare alle autorità italiane di presentare osservazioni e di fornire ulteriori informazioni in merito al seguente elenco di elementi, da non considerarsi comunque esaustivo:

- ogni informazione necessaria per valutare la compatibilità con il mercato interno della compensazione pagata a ciascuna società appartenente all'ex Gruppo Tirrenia, comprese Tirrenia e Siremar durante il periodo 2009-2011 (descrizione chiara dei servizi forniti e degli obblighi di servizio pubblico imposti). Per quanto riguarda Tirrenia e Siremar, tali informazioni dovrebbero anche includere l'importo esatto della compensazione, compreso l'utile consentito, nonché la giustificazione della ragionevolezza di tale livello di utile, in considerazione del rischio sostenuto dalle società nell'adempimento del servizio;
- una chiara descrizione degli eventuali servizi forniti da Tirrenia e Siremar non rientranti nell'ambito del regime di servizio pubblico;
- ogni informazione necessaria a valutare se la procedura di vendita abbia dato luogo a un prezzo di mercato sostenuto per i beni di Tirrenia e di Siremar: la metodologia di selezione dell'esperto indipendente, la valutazione prodotta dall'esperto, una descrizione complessiva delle trattative che hanno portato alla selezione dell'offerta vincente e di tutte le offerte ricevute, al fine di consentire alla Commissione di confrontare i prezzi di acquisto offerti da tutti i partecipanti alla gara.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. nota 45.

- (325) La Commissione ricorda alle autorità italiane che, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE le misure di aiuto descritte nel punto (282), nonché qualsiasi altro aiuto concesso, nel quadro del processo di privatizzazione, agli acquirenti delle società o all'attività economica svolta dall'ex Gruppo Tirrenia per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico in base alle nuove convenzioni/contratti di servizio pubblico deve essere notificato in anticipo alla Commissione.
- (326) La presente decisione riguarda unicamente gli aspetti relativi agli aiuti di Stato e non pregiudica in alcun modo qualsiasi ulteriore possibile valutazione da parte della Commissione in merito all'osservanza di altre disposizioni del trattato.
- (327) La Commissione richiama l'attenzione sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, che dispone che qualsiasi aiuto ottenuto illegalmente possa essere recuperato presso i beneficiari.
- (328) La Commissione avverte la Repubblica Italiana che provvederà a informare le parti interessate mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Essa provvederà, inoltre, a informare le parti interessate nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, mediante pubblicazione di una nota nel supplemento SEE della *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, oltre a informare l'Autorità di Sorveglianza EFTA inviando una copia della presente lettera. Tutte le parti interessate citate verranno invitate a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione.»

Precio de suscripción 2012 (sin IVA, gastos de envío ordinario incluidos)

Diario Oficial de la UE, series L + C, solo edición impresa	22 lenguas oficiales de la UE	1 200 EUR al año
Diario Oficial de la UE, series L + C, edición impresa + DVD anual	22 lenguas oficiales de la UE	1 310 EUR al año
Diario Oficial de la UE, serie L, solo edición impresa	22 lenguas oficiales de la UE	840 EUR al año
Diario Oficial de la UE, series L + C, DVD mensual (acumulativo)	22 lenguas oficiales de la UE	100 EUR al año
Suplemento del Diario Oficial (serie S: Anuncios de contratos públicos), DVD semanal	Plurilingüe: 23 lenguas oficiales de la UE	200 EUR al año
Diario Oficial de la UE, serie C: Oposiciones	Lengua(s) en función de la oposición	50 EUR al año

La suscripción al *Diario Oficial de la Unión Europea*, que se publica en las lenguas oficiales de la Unión Europea, está disponible en 22 versiones lingüísticas. Incluye las series L (Legislación) y C (Comunicaciones e informaciones).

Cada versión lingüística es objeto de una suscripción aparte.

Con arreglo al Reglamento (CE) nº 920/2005 del Consejo, publicado en el Diario Oficial L 156 de 18 de junio de 2005, que establece que las instituciones de la Unión Europea no estarán temporalmente vinculadas por la obligación de redactar todos los actos en irlandés y de publicarlos en esta lengua, los Diarios Oficiales publicados en lengua irlandesa se comercializan aparte.

La suscripción al Suplemento del Diario Oficial (serie S: Anuncios de contratos públicos) reagrupa las 23 versiones lingüísticas oficiales en un solo DVD plurilingüe.

Previa petición, las personas suscritas al *Diario Oficial de la Unión Europea* podrán recibir los anexos del Diario Oficial. La publicación de estos anexos se comunica mediante una «Nota al lector» insertada en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Venta y suscripciones

Las suscripciones a diversas publicaciones periódicas de pago, como la suscripción al *Diario Oficial de la Unión Europea*, están disponibles en nuestra red de distribuidores comerciales, cuya relación figura en la dirección siguiente de Internet:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_es.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) ofrece acceso directo y gratuito a la legislación de la Unión Europea. Desde este sitio puede consultarse el *Diario Oficial de la Unión Europea*, así como los Tratados, la legislación, la jurisprudencia y la legislación en preparación.

Para más información acerca de la Unión Europea, consulte: <http://europa.eu>

